

Bahía Blanca, **23** de febrero de 2024.

VISTO: Este expediente N° **FBB 754/2013/13/CA5**, caratulado: **“LEGAJO DE APELACION... en autos: ‘SURIS, JUAN IGNACIO, PIPKIN JUAN, CHANQUÍA, ROGELIO ALBERTO Y OTROS POR INFRACCION ART. 303’”**, proveniente del Juzgado Federal N° **1** de esta ciudad, para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 1643/1644, 1645/1647, 1651/1655, 1656/1681, 1682/1683 y 1692/1693, contra la resolución de fs. 1553/1639.

El señor Juez de Cámara, Roberto Daniel Amabile, dijo:

1. Llegan las actuaciones a esta Alzada en virtud de los recursos de apelación deducidos por la defensa de los imputados, Dr. Adrián Martín Rois (por Juan Ignacio Suris); Dra. Natalia Compagnucci (por Rogelio Alberto Chanquía); Dr. Gabriel Darío Jarque (por Domingo Tomás Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso); Dr. Leonardo Gómez Talamoni (por Paula Valeria Wagner y Fabio Héctor Crucianelli); y Dr. Facundo Andrés Álvarez (por Juan Pipkin).

Las vías de impugnación fueron articuladas contra el decisorio de fecha 11 de julio de 2023, dispuesto por parte del titular del Juzgado Federal Nro. 1 de la jurisdicción en cuanto: **a)** decretó el procesamiento sin prisión preventiva de **Juan Ignacio Suris** por considerarlo *prima facie* autor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 45, 303, inc. 1° y 2° “a” del CP) y trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos ocho millones (\$8.000.000); **b)** respecto de **Domingo Tomás Goenaga** y **Rogelio Alberto Chanquía** por considerarlos *prima facie* partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por haber actuado en ejercicio de su profesión (arts. 45, 303, inc. 1° y 2° “a” y “b” del CP) y trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos cinco millones (\$5.000.000); **c)** respecto de **Nicolás Ibarra Gutiérrez, Fabio Héctor Crucianelli** y **Paula Valeria Wagner**, por considerarlos *prima facie* partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con



habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 45, 303, inc. 1° y 2° “a” del CP) y trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos dos millones (\$2.000.000); **d)** con relación a **Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso**, por considerarlo *prima facie* partícipe secundario del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (arts. 46, 303, inc. 1° y 2° “a” del CP) y trabó embargo sobre sus bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil (\$500.000); **e)** dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a **Eduardo Suris, Guillermo Martín Suris, Juan Pipkin e Ignacio Javier Rodríguez**, en orden al delito que les fuera atribuido en autos; **f)** mantuvo la prohibición de salida del país de todos ellos; y **g)** ordenó la formación de causa por separado con las piezas procesales pertinentes a fin de investigar posibles conductas en infracción al art. 303 del CP por parte de Juan Pipkin y/u otros posibles intervinientes, dejando la dirección de la investigación a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 de esta ciudad en los términos previstos por el art. 196 del CPPN.

2. Contra la resolución de mérito interpusieron recurso de apelación las defensas de los imputados. Para un mejor desarrollo de los motivos de agravio formulados, señalaré cada una de las defensas articuladas por separado.

A) El Dr. Rois (en representación de Juan Ignacio Suris) se agravió de: nulidad del requerimiento de instrucción por falta de fundamentación, violación del artículo 188 y 69 del CPPN, lo que lesiona de manera directa e inmediata las garantías de imparcialidad judicial, plazo razonable, defensa en juicio, debido proceso legal y *ne bis in idem*; arbitrariedad por infundada aplicación de las reglas de la conexidad; nulidad del auto de fs. 665 por el cual se delega la instrucción en la fiscalía; nulidad del auto de fs. 24 que ordena la inmediata intervención de una fuerza de seguridad cuyos miembros estaban sospechados de estar involucrados como miembros o partícipes de los hechos que se investigan (art. 194 bis, CPPN) que tiene relación directa e inmediata con la violación a la garantía de imparcialidad judicial; validez de los actos y operatividad del principio *ne bis in idem*.



USO OFICIAL

Sostuvo que, en caso de no hacerse lugar a las nulidades planteadas, debía declararse la insubsistencia de la acción penal por prescripción, por violación del plazo razonable.

En lo que respecta al contenido del auto de procesamiento se agravio por: la falta de configuración del tipo objetivo del delito de lavado de activos, ausencia de acreditación del delito precedente, de la relación entre el presunto delito precedente y el lavado de activos, de la configuración del verbo típico y arbitrariedad en la valoración probatoria.

Por último, y en forma subsidiaria, solicitó que se anule la resolución apelada por arbitrariedad por fundamentación aparente, por no resultar lo decidido una derivación razonada de derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa y, en consecuencia, se disponga el sobreseimiento de Juan Ignacio Suris, de conformidad con lo dispuesto por el art. 336, CPPN.

B) La Dra. Compagnucci (apoderada de Rogelio Alberto Chanquía) expuso los siguientes agravios: la prolongada duración del proceso y la afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable; que los delitos atribuidos se reputen configurados bajo la vigencia de la ley 26.683 –incorporada al CP en el año 2011–, máxime cuando el periodo abarcado en la presente investigación tuvo comienzo en el año 2008, inobservando las prescripciones de la ley penal más benigna; que se entienda constituida una conducta posdelictual sin que se encuentre configurado el elemento normativo del tipo penal de conexión (hechos acaecidos desde el año 2008 relacionados a conductas anteriores); la deficiente fundamentación del auto que se impugna; el hecho de ser ‘apoderado’ de tres firmas pertenecientes a Juan Suris, no constituye maniobra típica del delito enrostrado, y además su rol fue de asesor contable impositivo; la configuración delictiva por resultar profesional contable, lo cual solo se asemejaría a la aplicación de un derecho penal de autor; la participación que se intenta achacar en el ilícito investigado, resulta alejada de un escenario delictual, la cual siempre estuvo ligada a su labor como asesor contable impositivo (no de contador); y por el monto fijado en concepto de responsabilidad civil.

C) El Dr. Jarque (en defensa de Domingo Tomás Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso) plantea: el



desconocimiento que el auto impugnado exhibe, a principios y garantías sustantivas, tales como el de legalidad, *ne bis in idem*, la prescripción de la acción, la aplicación de la ley penal más benigna; la ausencia de un pronunciamiento que determine la existencia de un ilícito penal previo, que impide procesar por un presunto lavado de dinero consecuente; que no es válido perseguir nuevamente a iguales personas, por iguales hechos, con iguales pruebas, con la sola invocación de una figura penal diferente; que se invoquen prácticas de lavado de activos desde el año 2008, cuando los presuntos delitos que le deben resultar antecedentes, son posteriores; la no aplicación de las prescripciones de la ley penal más benigna, habida cuenta que la figura en cuestión fue incorporada al Código Penal en el año 2011; falta de fundamentación de la decisión dictada; arbitraria valoración probatoria; la falta de acreditación del elemento subjetivo del tipo; la atribución del carácter de ‘organizador’ efectuada respecto de Goenaga, y la calificante que le cabe sólo por ser profesional contable; la tipificación decidida; la traba de embargo, y que la medida haya sido dispuesta sin atender a las situaciones actuales de cada uno de los encartados.

D) El Dr. Gómez Talamoni (como abogado de Paula Valeria Wagner y de Fabio Héctor Crucianelli) se agravio de: ausencia de motivación, falta de elementos de cargo en relación a la autoría del delito, participación y responsabilidad penal en los hechos enrostrados; la inexistencia del delito precedente; y la arbitrariedad respecto a la fijación del monto de responsabilidad civil.

E) Finalmente, el Dr. Álvarez (representando a Juan Pipkin) se agravio de que al decretar la falta de mérito de su asistido por no tener vinculación con Juan Ignacio Suris correspondía el dictado del sobreseimiento; de que se haya ordenado formar causa por separado con las piezas procesales pertinentes a fin de investigar posibles conductas en infracción al art. 303 del CP por parte de Juan Pipkin y/u otros posibles intervinientes ya que de tal forma coexistirían dos imputaciones respecto de su asistido; que no hayan sido considerados en la resolución recurrida los descargos y explicaciones a los cuestionamientos del dictamen fiscal; y denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba.

3. Llegado el expediente a este Tribunal, las defensas de los imputados presentaron informes sustitutivos de la audiencia prevista en el art. 454



USO OFICIAL

CPPN en los que desarrollaron los fundamentos de sus apelaciones (cf. fs. 1722/1729, 1730/1733, 1734/1745 y 1746/1750).

Asimismo, el defensor particular de Juan Ignacio Suris presentó un escrito en el que manifestó que se remitía en un todo a los fundamentos vertidos al momento de interponer el recurso de apelación (fs. 1706).

El Fiscal de Cámara hizo lo propio y se pronunció por el rechazo de los recursos de apelación interpuestos, y la confirmación de la decisión de mérito dictada en la instancia de grado (fs. 1707/1711).

En la misma oportunidad, el representante de la Unidad de Información Financiera –constituida como querellante–mejoró los fundamentos de la apelación, contestó los agravios formulados por las defensas de los coimputados y propició la confirmación de lo resuelto por el Sr. Juez Federal de la instancia (fs. 1712/1721).

4. Ahora bien, cabe resolver los recursos de apelación interpuestos por los procesados, los que serán analizados individualmente a efectos de una mejor claridad expositiva.

a. Hipótesis delictiva: maniobras de lavado de activos.

Como primera medida, cabe recordar que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de testimonios extraídos de la causa nro. FBB 12000124/2012 en la que se investigó patrimonial y financieramente a Juan Ignacio Suris respecto a infracciones de la Ley de Estupefacientes –actualmente radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esta ciudad–, proceso en el que resultó condenado como coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737 y 45 del CP) a la pena de seis años de prisión, multa de \$25.000, accesorias legales y costas del juicio (cf. FBB 12000124/2012/TO1).

En ese orden, el Ministerio Público Fiscal amplió la investigación y abarcó a los procesados en la causa nro. FBB 12000018/2011 en la que se investigó la comisión del delito de asociación ilícita fiscal, incluyendo, en consecuencia, a Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Eduardo Suris, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga, así como también a los imputados en el



expediente nro. FBB 12000124/2012 seguido por infracción a la ley 23.737, en lo que aquí interesa, respecto de Guillermo Martín Suris y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso (fs. 664).

El 03/11/2023 el Tribunal Oral en lo Criminal dictó sentencia en el marco del proceso penal seguido contra los nombrados respecto del delito de asociación ilícita fiscal, imponiendo la pena de seis años en relación a Juan Ignacio Suris, y decretó, la unificación de dicha pena, con la que fuera dispuesta en el proceso sobre comercialización de estupefacientes, en la pena única de ocho años de prisión, accesorias legales y costas.

En síntesis, el objeto procesal del presente legajo, consiste en determinar la posible comisión del delito de lavado de activos comprendido en el período abarcado entre el 1 de enero de 2008 al 25 de junio de 2013.

En dicho norte, se consideró en primera instancia que Juan Ignacio Suris ingresó al circuito comercial legal, mediante la adquisición de diversos bienes y constitución de sociedades, el dinero proveniente de la comisión de los delitos de asociación ilícita fiscal investigada en la causa nro. FBB 12000018/2011 y comercio de estupefacientes en causa FBB 12000124/2012, por una suma superior a \$300.000, con el fin de que adquieran la apariencia de origen lícito, habiendo resultado ser el principal beneficiario de la maniobra.

Así, y a partir de diversos y contundentes elementos de prueba incorporados al legajo, se arribó a la conclusión de que, para concretar dichas operaciones, Juan Ignacio Suris, actuó en calidad de jefe/organizador de la maniobra de lavado de activos, mientras que sus consortes de causa, a saber, Rogelio Alberto Chanquía y Domingo Tomás Goenaga, intervinieron como lavadores/organizadores. Así como Nicolás Ibarra Gutiérrez, Fabio Héctor Crucianelli, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Paula Valeria Wagner habrían actuado como lavadores/colocadores del dinero de origen espurio.

Para concretar dichas maniobras se habrían valido de la estructura de las firmas Scarsur Bahía SA, E&J Argentina SRL, M-Magna SRL, CPV Industria SA, Crear Visión SA, Attimo Bahía Blanca SA y Bocker Group SA; de la adquisición de una gran cantidad de vehículos respecto de los cuales Juan Ignacio Suris se encontraba autorizado para su conducción o había contratado las pólizas de

USO OFICIAL



USO OFICIAL

seguro sin ser su titular, y de las cuantiosas acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las mencionadas firmas –constituídas por Suris– en las que habría recibido acreditaciones bancarias por \$14.117.071.

El mayor interesado y beneficiario de las maniobras investigas y, por ende, el principal responsable del reproche penal es Juan Ignacio Suris, ya que es quien aportó los fondos ilícitos y conformó la organización delictiva para poder darle apariencia de legalidad a tales activos.

Las maniobras las llevó a cabo de manera directa, aunque también a través de sus contadores, prestanombres y colaboradores, cuya autoría y responsabilidad ha sido, en la mayoría de los casos, debidamente analizada en el auto de mérito sin perjuicio de las valoraciones que se harán en oportunidad de tratar los agravios respectivos.

En consecuencia, el titular del Juzgado Federal nro. 1 arribó, con el grado de certeza propio de esta etapa, a la conclusión de que Suris fue el jefe/organizador de la maniobra de lavado de activos, mientras que sus consortes de causa, intervinieron como lavadores/organizadores y colocadores del dinero de origen espurio.

Sentado como ha quedado el tramo fáctico por al cual se dispusiera el auto de mérito, habré de ingresar en el tratamiento de los recursos deducidos, los que serán analizados en correlato con la situación procesal de cada una de las personas imputadas.

5. Situación procesal de Juan Ignacio Suris

A) En primer término, en relación a los planteos de nulidad introducidos por la defensa del nombrado en oportunidad de interponer su recurso de apelación, respecto del requerimiento de instrucción, del auto por el cual se delega la instrucción en la fiscalía y del auto que ordena la intervención de una fuerza de seguridad cuyos miembros estaban sospechados de estar involucrados como miembros o partícipes de los hechos que se investigan, corresponde remitirme a lo apuntado en anteriores decisorios (cfr. FMP 28208/2017/4/CA4-CA5, FBB 3593/2015/1/CA1, FBB 9294/2018/9/CA1, FBB 18439/2018/1, entre otros), en cuanto a que este tipo de nulidades no deben ser tratadas directamente por la Alzada, toda vez que se vinculan con vicios que afectan el procedimiento y no el auto de mérito apelado, disponiendo



de un trámite incidental especial para su substanciación y resolución, previsto específicamente en el art. 170 *in fine* del CPPN.

En efecto, salvo aquellas cuestiones que surgen de manera manifiesta y traigan aparejada una nulidad de orden general –circunstancia que de ningún modo se observa en el presente legajo– los defectos anteriores a la resolución recurrida, deben impugnarse a través del incidente de nulidad previsto en la mencionada norma procesal.

B) En segundo lugar, corresponde analizar el agravio que invoca afectación a la garantía de *ne bis in idem*, al afirmar que existiría una coincidencia de objetos procesales entre lo investigado en las presentes actuaciones, y los hechos que justificaron la elevación a juicio en la causa FBB 12000018/2011 seguida por el delito de asociación ilícita fiscal.

Adelanto que tal coincidencia, en el presente caso, no se verifica, por cuanto no se advierte concurrencia de los elementos que hacen operativa la garantía invocada.

A saber, las tres identidades o condiciones que deben confluir a fines de determinar la violación de la garantía constitucional que prohíbe la múltiple persecución penal prevista en los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la CN; art. 8.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos, son los siguientes: 1) identidad **de la persona** perseguida judicialmente (*eadem persona*), se protege exclusivamente a quien ha sido perseguido mientras esa persecución se mantenga o haya sido concluida por sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme (Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de derecho procesal penal”, t. I, Buenos Aires, 1960, p. 251), 2); identidad **del objeto material del proceso** (*eadem res*), esta debe ser una identidad real y no jurídica, la confrontación debe hacerse entre dos supuestos de hecho mirados en su materialidad y no en su significación jurídica; 3) identidad **de causa** para perseguir (*eadem causa petendi*), el efecto preclusivo presupone que el proceso terminado haya sido susceptible jurídicamente de un agotamiento completo del caso. El tribunal con jurisdicción y competencia suficientes, debe haber podido consumir el objeto procesal completamente y haberse agotado el caso íntegro en su totalidad.

La garantía no significa que no pueda perseguirse a una persona por el mismo delito, sino por el mismo hecho, entendido como “acontecimiento real,

USO OFICIAL



USO OFICIAL

que sucede en un lugar y en un momento o período determinados, sin que la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla” (confr. MAIER, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal Argentino”, t. 1b, p. 607).

En la misma línea, jurisprudencialmente se afirma que el principio *ne bis in idem*, consagrado en el art. 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se sustenta en la prohibición de un nuevo proceso sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada (Corte I.D.H. Caso “Mohamed vs. Argentina”, sentencia de 23 de noviembre de 2012, párr. 125).

De la lectura del decisorio recurrido, aprecio que dicha causal – amén de no haber sido planteada en la instancia– no se verifica, por lo que propiciaré su rechazo.

La defensa de Juan Ignacio Suris afirma que las maniobras y operaciones que se le atribuyen al nombrado vinculadas al lavado de dinero serían idénticas a las conductas por las que se encuentra condenado en el proceso sobre asociación ilícita fiscal (cf. FBB 12000018/2011/TOF1).

En el referido proceso penal –el que constituye uno de los ilícitos precedentes del delito previsto en el art. 303 del CP– el hecho, entendido en su materialidad fáctica, por el que Suris resultó condenado, se vincula con la configuración, mediante la constitución de sociedades carentes de actividad real, de una asociación destinada a la venta ilegal de facturas comerciales apócrifas que permitieron a los eventuales compradores disminuir de modo fraudulento, su carga tributaria (cfr. requerimiento de elevación a juicio, de fecha 25 de septiembre de 2015 en FBB 12000018/2011/TOF1).

Ahora bien, en las presentes actuaciones, el objeto material controvertido refiere a diferentes maniobras realizadas por el encartado, mediante las que presuntamente ingresó al circuito comercial legal –adquiriendo diversos bienes: compra de vehículos registrados a nombre de personas vinculadas a Suris y cuantiosas sumas de dinero acreditadas en cuentas bancarias de las sociedades por él conformadas– el dinero obtenido de la comisión de los ilícitos de asociación ilícita fiscal y comercio de estupefacientes, con el fin de que adquieran la apariencia de origen lícito, habiendo resultado ser el principal beneficiario de dichas maniobras.



La decisión de la instancia valora razonablemente, que Juan Ignacio Suris se valió de diversas personas de su confianza – lavadores/colocadores– siendo algunos de ellos, además sus consortes de causa. Incluso advirtió que el nombrado tampoco registró –por lo menos en los años investigados– actividad alguna en relación de dependencia, aunque poseía participación societaria en las firmas CPV Industria SA, M-Magna SA, E&J Argentina SRL, Scarsur Bahía SA, Broker Group SA, Attimo Bahía Blanca SA y Crear Visión SA, respecto de las cuales entre los años 2008 y 2011 recibió acreditaciones por un monto aproximado de \$14.117.071 en las cuentas bancarias que registraban dichas sociedades.

Las mismas maniobras se registran respecto de operaciones efectuadas con empresas proveedoras de seguros en cuanto a que Juan Ignacio Suris contrató la póliza de una gran cantidad de vehículos, y/o poseía cédulas azules que lo habilitaban a su conducción, extremos que refuerzan la presunción de que en los hechos le pertenecían, aunque su situación patrimonial y económico formal no hacía posible registrarlos a su nombre.

Por lo tanto, el hecho entendido como acontecimiento real motivo de la presente investigación, es diverso de aquel por el que resultó recientemente condenado en el proceso seguido por asociación ilícita fiscal, de modo que el agravio vinculado a la presunta violación a la garantía que prohíbe la múltiple persecución penal debe ser desestimado.

C) En tercer lugar, la defensa del nombrado plantea la extinción de la acción penal por insubsistencia de la misma, fundado en que la actividad de la autoridad a cargo de la investigación fue determinante en la excesiva duración del proceso.

Cabe señalar que la citada garantía (consagrada en el art. XXV de la DADDH, arts. 9.3 y 14.3.c del PIDCP, arts. 7.5 y 8.1. de la CADH, art. 75–22 CN) no se encuentra limitada exclusivamente al cumplimiento efectivo de los plazos previstos en el código sustantivo, siendo la judicatura la que deberá establecer, en el caso concreto, si la tramitación de un proceso es irrazonable por el tiempo transcurrido desde su inicio, aun cuando los plazos contemplados en los artículos 62 inc. 1 y 67 del CP no se encuentren fenecidos.

USO OFICIAL



USO OFICIAL

En ese orden de ideas, se debe tener presente que el plazo razonable no es un plazo determinado y no puede traducirse en un número específico de días, meses, años, sino en una pauta genérica útil para evaluar la duración razonable o no del proceso, y la misma debe ser analizada a través de la consideración de distintos elementos a tener en cuenta, a saber: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales, d) la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso y e) el análisis global del procedimiento (cfr. doctrina de la Corte I.D.H., caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, sentencia del 29 de enero de 1997, párr. 77; y caso “Kimel vs. Argentina”, sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 97, caso “Jenkins vs. Argentina”, sentencia de 26 de noviembre de 2019, párr. 106, caso “Valle Jaramillo y otros vs. Colombia”, sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 155, caso “Arguelles y otros vs. Argentina”, sentencia de 20 de noviembre de 2014, “Tibi vs. Ecuador”, sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 168, entre muchos otros).

Ahora bien, analizadas las constancias de la causa a la luz de tales lineamientos, se observa que en el caso *sub examine*, no se ha producido vulneración alguna de la garantía constitucional a ser juzgado en un plazo razonable.

Para arribar a tal conclusión, se tiene en cuenta que la presente investigación se inició a partir de los testimonios extraídos de la causa nro. FBB 12000124/2012 en la que se investigaron maniobras vinculadas al comercio de estupefacientes. Que, ante lo informado por la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas (04/06/2013), y a partir del requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal (17/06/2013) en el marco de la pesquisa se produjeron diversas medidas probatorias, tales como, informes del Registro Nacional de Propiedad Automotor (10/07/2013), del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) (3/10/2013), informes de la Dirección Nacional de Migraciones (04/07/2013), informes de la Inspección General de Justicia, de AFIP (11/07/2013), informes producidos por compañías de seguros sobre contratación de pólizas, informes producidos por distintas entidades bancarias sobre cuentas de las que Suris era su titular, informes técnicos contable de la División Pericias Contables de la Dirección de Delitos Económicos (04/12/2013), información resultante del sistema informático “e-fisco” remitida por la AFIP-D (24/04/2014), informes de dominio del Registro



Nacional de la Propiedad Automotor (21/04/2014), informe histórico de dominio de la DNRPA (05/05/2014), informes de AFIP sobre avances de inspección (01/08/2016), por nombrar algunas de las medidas de prueba ofrecidas y producidas, en el marco de la investigación.

De lo antes expuesto, sumado a que el delito de lavado de activos es un ilícito de carácter complejo, en el que participaron en su realización una pluralidad de intervinientes, que cada uno de ellos ha desplegado diversas acciones y roles para concretar las conductas investigadas; se observa que desde la presunta realización de las operaciones de blanqueo de activos hasta el dictado de la decisión de mérito que dispone el procesamiento de Juan Ignacio Suris, han transcurrido menos de 10 años, término inferior al plazo de prescripción previsto para esta clase de delitos (art. 62 inc. 2 CP), por lo que no puede considerarse que los tiempos en que hasta el momento se viene desarrollando el proceso, excedan los parámetros de razonabilidad.

En consecuencia, al no encontrarse acreditada la efectiva vulneración de la garantía constitucional que se invoca, a la luz de los precitados parámetros establecidos por la Corte I.D.H, corresponde rechazar el planteo de insubsistencia de la acción penal.

D) En otro orden de ideas, la defensa del nombrado se agravia de la ausencia de acreditación de los elementos que conforman el delito previsto en el art. 303 del CP. Dicho planteo tendrá adecuado tratamiento en oportunidad de expedirme sobre la calificación legal de los hechos atribuidos.

Del mismo modo, las cuestiones que hacen a la procedencia de la medida cautelar de carácter real, y eventualmente de carácter personal, también tendrán un adecuado tratamiento por separado en el punto respectivo.

6. Situación procesal de Rogelio Alberto Chanquía.

Corresponde ahora abocarme al estudio del recurso de apelación deducido por la defensa de Rogelio Alberto Chanquía. Conforme fue reseñado, el órgano *a quo* dispuso su procesamiento sin prisión preventiva por considerarlo *prima facie* partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por haber actuado en ejercicio de su profesión (arts. 45, 303, incs. 1° y 2° “a” y “b” del CP).



USO OFICIAL

La defensa del encartado interpuso recurso de apelación (fs. 1643/1644) agraviándose de la prolongada duración del proceso, de la prohibición de aplicar retroactivamente una ley penal posterior, de la falta de acreditación de los elementos del tipo penal del art. 303 del CP, de la deficiente fundamentación de la decisión de mérito impugnada, vulneración a las reglas de participación, del monto en concepto de responsabilidad civil, y de que se entienda constituida una conducta posdelictual, sin que se encuentre configurado el elemento normativo del tipo penal de conexión por hechos acaecidos desde el año 2008 relacionados a conductas anteriores.

A) En primer término, formula agravio vinculado a la prohibición de aplicar retroactivamente la ley posterior, afirmando que afecta que los delitos atribuidos se reputen configurados bajo la vigencia de la nueva ley 26.683 –art. 303 del CP– cuya figura fue incorporada al Código Penal el 21 de junio del año 2011, y que el periodo abarcado en la presente investigación y por el que fue indagado Rogelio Alberto Chanquía tuvo comienzo en el año 2008.

Analizadas las constancias de autos, cabe destacar que, si bien le asiste razón a la defensa, en cuanto a que obran conductas que se llevaron a cabo durante la vigencia del texto anterior a la reforma, lo cierto es que éstas continuaron ininterrumpidamente con posterioridad al dictado de la nueva ley.

Se ha sostenido que, dadas las características que presenta el delito de lavado de activos, podría partirse de la idea de una presunción de multiplicidad de actos para lograr su transformación. Es que “se trata de un delito que tiende a ocultar, diluyendo las ganancias provenientes de otro, generalmente grave (...) pues además de contribuir a la impunidad del primero, procura asegurar el provecho patrimonial por él producido (...) el sujeto activo deberá realizar más de una conducta a los fines de que su maniobra no resulte sospechosa. Esta circunstancia permite desprender *a priori* que el sujeto para poder lavar deberá realizar más de un acto, y que su dolo inicial resultará único a lo largo de todas las acciones de lavado (...) multiplicidad de hechos homogéneos o heterogéneos, que hacen al acto de lavado de activos, forman parte de una unidad subjetiva destinada a este fin. En otras palabras, si para poder “lavar” se necesita más de un acto, la previsión de la realización de más de un acto ya permite concluir que desde el momento de la ideación, el sujeto activo en su *iter criminis* gesta la idea de pluralidad de actos, en un



lapso temporal, que se muestra a primera vista como una temporalidad fragmentada” (cfr. Alonso, Silvia Andrea, “Lavado de Activos: ¿Concurso real, ideal o delito continuado?”, www.rubinzalonline.com.ar).

El delito continuado puede darse por diferentes razones; que los particulares actos integran un mismo y único contexto delictivo; que cada uno de ellos no sea más que la continuación de una misma conducta; o bien que sean la consecuencia de una misma trama delictiva (Núñez Ricardo C., “Las Disposiciones Generales del Código Penal”, Marcos Lerner Editora Córdoba, año 1988, págs. 249/253).

En esta línea de pensamiento, estamos en presencia del delito de lavado de activos que se desarrolló de manera continua; y que durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, sin que se presente un caso de sucesión legislativa.

Así, se afirma jurisprudencialmente que respecto de la ley aplicable en los delitos permanentes, si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes –como en efecto ha sucedido en el *sub lite*–, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales en que debe operar la manda prevista en el art. 2 del Código Penal – que impone aplicar la más benigna–, sino de coexistencia de leyes, debiendo aplicarse una sola ley, que es la vigente en el último tramo de la conducta punible (cfr. CFCP Sala IV, FSM 62590/2015/TO1/CFC4, “Marzioletti, Liliana Adela y otros s/ recurso de casación”, Reg. 1501/19, del 17/07/2019).

Que además, comparto la postura doctrinaria que señala que si una conducta no era considerada delictiva cuando el imputado comenzó a realizarla y, luego, aquella resulta incriminada a partir de la sanción de una nueva ley, “... si el individuo persiste en su acción será castigado conforme a esa ley nueva, no por lo que hizo antes de su existencia cuando tal accionar era impune, sino por lo que sigue haciendo después de su promulgación no pudiendo invocar en modo alguno como ‘ley penal más benigna al período de realización del hecho transcurrido cuando él no se encontraba incriminado, ya que resultaría inadmisibles y absurdo que el autor pueda prevalerse de aquella situación para poder seguir cometiendo el delito impunemente, toda vez que bien pudo el delincuente desistir de su acción una vez entrada en vigencia la nueva ley” (cfr., en ese sentido, Fierro, Guillermo J., “Legalidad y retroactividad de las normas penales”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2003, p. 328/329).



USO OFICIAL

Es que de seguirse la interpretación pretendida por la defensa – vale reiterar, de que el comportamiento sería atípico porque tuvo inicio antes de la entrada en vigor del actual art. 303 CP– nos llevaría al absurdo de considerar que existiría una suerte de permiso para realizar conductas ilícitas, con el único requisito de que hayan comenzado antes de que se prohibieran, sin importar que se haya persistido en el accionar vedado durante la vigencia de la nueva ley.

De la valoración de los hechos por los que viniera procesado Rogelio Alberto Chanquía, a la luz de las constancias probatorias incorporadas, surge que el nombrado registró a su nombre el vehículo marca Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 CR (2012) dominio LAM 046 el 22/03/2012, sin poseer capacidad económica para ello (cfr. Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras fs. 878/896). Que, Juan Ignacio Suris poseía autorización para su conducción y fue quién además lo aseguró en 2012 en Berkley International de Seguros. Que, además, Chanquía aportó a la estructura creada y utilizada por su beneficiario, los conocimientos técnicos y profesionales con que contaba en su calidad de contador y participó en las empresas de Suris (cfr. FBB 120000018/2011). Que, tiene registrado como empleado a Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, quien fuera investigado en la causa nro. FBB 12000018/2011 por haber cobrado y endosado cheques de las firmas pertenecientes a Suris –Attimo Bahía Blanca SA, CVP Industria SA y M-Magna SA–.

En este sentido, del Informe de AFIP surge que Juan Ignacio Suris efectuó un descargo en sede administrativa el 12/09/2011, ocasión en la que refirió que a partir de julio de 2011 Chanquía comenzó a operar sus firmas, refiriéndose a Attimo Bahía Blanca SA, CVP Industria SA y M-Magna SA, y que era apoderado de la firma E&J Argentina SRL constituida por Juan Ignacio Suris y su padre, Eduardo Suris (fs. 1027/1037).

En el caso concreto, no es posible desdoblar las acciones materiales que componen el comportamiento criminal –entendido como continuidad del injusto– para reclamar la impunidad pues la actividad llevada a cabo, con la multiplicidad de operaciones tendientes a dotar de licitud a los fondos obtenidos de los delitos precedentes, hasta su reingreso al mercado formal –2013–, supone el mantenimiento de una situación antijurídica por la propia voluntad de sus autores y demás intervinientes.



En ese sentido, la defensa no ha logrado rebatir con sus planteos los fundamentos dados por el Juez de grado para acudir a dicha calificación legal, pues la mera invocación de la ultra-actividad de la ley penal, como excepción del principio de legalidad, no resulta aplicable al sub examine.

Al existir una continuidad en las operaciones realizadas por el encartado –adquiriendo un vehículo y extendiendo a Suris una cédula azul, operando las firmas creadas por Suris, registrando en relación de dependencia a uno de los consortes de causa, y aportando no simplemente sus conocimientos técnicos y contables en el accionar para perpetrar el ilícito penal precedente, sino también facilitando la integración de los bienes fruto de esa actividad en el patrimonio de Suris con aparente origen lícito– debe tomarse la fecha en que la conducta delictiva cesó, que en el caso ocurrió con posterioridad al dictado de la nueva ley, por lo que corresponde aplicar la normativa en el texto vigente, art. 303 del CP conforme ley 25.246.

En tal sentido, el planteo formulado al respecto habrá de ser rechazado.

B) En segundo término, se agravia la defensa de la falta de acreditación del supuesto objetivo para la configuración del delito de lavado –ilícito penal precedente–, planteo que como fuera señalado oportunamente, será tratado en el punto relacionado con la calificación legal.

C) En otro orden de ideas, formula agravio la defensa de Chanquía en relación a la atribución de responsabilidad del nombrado y a su configuración delictiva agravada por resultar profesional contable, circunstancia que asimila como propia de un derecho penal de autor.

La figura prevista en el art. 303 apartado 2) inc. b) asimila a los funcionarios públicos el supuesto del agente que hubiera ejecutado el delito en ejercicio de una profesión u oficio que requieran habilitación especial para ello, por lo que, en el caso, el autor del delito recibirá la misma pena que el primero.

Con el término “ejercicio” se hace mención a la actividad para la cual se requiere un aprendizaje especializado, con respaldo académico de una institución educativa.

En relación al hecho en sí mismo, calificada doctrina tiene dicho que “...tampoco se trata ya de un comportamiento neutral conforme al rol cuando su



USO OFICIAL

titular deja ya de actuar de manera estandarizada, como lo haría por ejemplo con cualquier cliente, y adapta su prestación al plan delictivo del autor” (CÓRDOBA, Fernando J., “Delito de lavado de dinero”, 1ra edición, 3ra. reimpresión, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2017, pág. 117).

Ahora bien, se desprende de las presentes actuaciones que Rogelio Chanquía no se limitó a realizar actos estereotipados o inocuos, propios de su profesión, lo que eventualmente, a la luz de la teoría de la imputación objetiva podría traer aparejada la exclusión de la tipicidad a través del supuesto denominado “*prohibición de regreso*”.

Este instituto impide que a los comportamientos que son considerados normativamente como estereotipados o inocuos se les pueda atribuir las consecuencias lesivas que se produzcan por su utilización en una organización no permitida, o que otro haga de él. En este sentido, Jackobs señala que “*quién asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano, aunque el otro incardine dicho vínculo en una organización no permitida.*” (“La imputación objetiva en el derecho penal”, traducción Manuel Cansio Meliá, Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, p. 21).

En el caso de autos no ha habido una desviación por parte de un tercero del comportamiento del imputado hacia una organización no permitida, sino que, por el contrario, ha sido quien junto a otras personas ha participado de plan delictivo.

Conforme fuera señalado, Chanquía era apoderado de una de las firmas de Juan Ignacio Suris, operaba en tres de las personas jurídicas constituidas por aquél, y vino a componer la situación tergiversada que había pergeñado Goenaga, consorte de causa en el proceso penal donde se investigó la asociación ilícita fiscal.

Por otro lado, receiptó bienes producto del lavado, extendiendo cédula azul para conducir en relación al rodado Mitsubishi dominio LAM 046, sobre el cual Suris contrató una póliza de seguros. Al respecto, durante su indagatoria sostuvo que no tenía carnet de conducir y por eso su camioneta la manejaba Suris, con quien efectuaba viajes de negocios o a quien le encargaba gestiones en otras localidades.



Así, verificadas las constancias del presente proceso, se advierte que su consorte de causa Ezequiel Ferrari Reynoso, se encontraba inscripto como dependiente suyo, bajo la modalidad contractual a tiempo completo en la Zona Geográfica de Santa Cruz, sin remuneración (fs. 1032/1032 vta.).

También se verificó, y fue debidamente valorado en la instancia, que Ferrari Reynoso ha cobrado cheques girados contra las cuentas de ATTIMO Bahía Blanca SA, CVP Industria SA y M-Magna SA por un total de \$2.712.361,45, lo que resultó a todas luces incompatible con su perfil patrimonial.

Asimismo, expuso Chanquía que Suris lo apoderó al solo efecto de representarlo frente a la AFIP para atender sus operaciones financieras. El nombrado al prestar declaración indagatoria (fs. 1144/1147) expresó que Juan Ignacio Suris contrató sus servicios en marzo de 2011 por recomendación del Dr. Weiman, dado el renombre que había adquirido el dicente en la zona por sus conocimientos en temas tributarios, para que lo asista en carácter de consultor contable impositivo frente a las órdenes de intervención que tramitaban ante la AFIP respecto de Suris relativas a hechos anteriores a la fecha de su contratación cuando Goenaga estaba a cargo de manejar su situación contable.

Negó conocerlo con anterioridad a su contratación, aunque indicó que el vínculo profesional que los unió, posteriormente derivó en una relación de amistad y confianza recíproca.

Ahora bien, resulta a todas luces inverosímil lo expresado en torno a la camioneta que –según sus dichos– sería de su propiedad, pero la conducía Suris, quien además tenía las llaves de la misma en su poder y abonaba el correspondiente seguro. Es evidente que el verdadero propietario del rodado era su consorte de causa y que el contador actuaba, en este caso, únicamente como testaferro del bien. Le permitió de esa manera la adquisición de un vehículo con ganancias espurias, provenientes de la actividad delictiva desplegada por Juan Ignacio Suris.

Se observan aspectos que demuestran que la relación excedía la simple prestación de servicios contables puros y su colaboración en el delito investigado fue fundamental en razón de sus conocimientos técnicos.

El propio Suris explicó que desde julio de 2011 fue quien se encargó de operar las claves fiscales de CVP Industria SA y M-Magna SA (ambas

USO OFICIAL



USO OFICIAL

firmas resultaron ser meras usinas expendedoras de facturas apócrifas, catalogadas así por AFIP en el marco de la causa FBB 12000018/2011).

Las circunstancias apuntadas permiten concluir el doble rol de Chanquía de asistencia técnica y colocador de los bienes de Suris en el mercado. El nombrado no puede esgrimir satisfactoriamente que desconocía el conjunto de actividades ilegales que se estaban llevando a cabo, desde que era apoderado de firmas catalogadas como usinas expendedoras de facturas, mantenía una relación de confianza y amistad con Juan Ignacio Suris, y favoreció la integración de los bienes generados a partir de los ilícitos precedentes, intentando brindar una apariencia lícita a los mismos.

Ahora bien, lo cierto es que dichas empresas fueron catalogadas por la AFIP como usinas expendedoras de facturas apócrifas, que conllevó a la generación de fondos ilícitos que luego Suris, con colaboración de sus consortes de causa –entre los que se encuentra Chanquía–, introdujo en el mercado con el fin de que adquirieran apariencia de origen lícito. Por ello, resulta razonable concluir que el asesoramiento prestado por el contador no se limitó en la administración de las estructuras societarias.

Por el contrario, tal como se valorara a lo largo de los considerandos, su participación en la maniobra ilícita excede el desempeño de su mero rol profesional, no solo por su participación como apoderado de las firmas constituidas por Suris, de empresas vinculadas a la actividad delictual, sino además a partir de un rol protagónico que le cupo en el asesoramiento de Juan Ignacio Suris, con quien más allá de su vínculo de asesor profesional, aparece ligado de manera directa apoderado de una de las firmas, y con un claro aporte a las maniobras de inyección de activos de origen ilícito en las personas jurídicas, circunstancias que permiten valorar su desempeño por fuera del rol profesional en el cual su defensa pretende ampararlo.

D) En otro orden de ideas, y en relación a la pretendida afectación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, se observa que la misma ha sido respetada, teniendo en cuenta la complejidad del hecho investigado, la pluralidad de intervinientes, y las diversas medidas probatorias producidas. A efectos de no reiterar tal aspecto, me remitiré a lo señalado al contestar idéntico agravio deducido por la defensa técnica de Juan Ignacio Suris.



E) En relación al agravio expuesto por la defensa del encartado respecto de que la imputación por los presuntos hechos de lavado objeto del presente proceso se trataría de una conducta posdelictual, en razón de que la ejecución del hecho precedente tendría que haber comenzado antes que la del posterior y no a la inversa, adelantó que habré de propiciar al acuerdo el rechazo de dicho agravio.

Cabe aclarar que tal como se desprende de la causa sobre asociación ilícita fiscal, el marco temporal de los hechos allí investigados abarcó el período del 22 de abril de 2004 –fecha en que se constituyó la primera sociedad–, hasta el año 2012 (cf. FBB 12000018/2011/TO1). Por su parte, en la causa de comercialización de estupefacientes, el Tribunal Oral interviniente tuvo por acreditado el período temporal abarcado de los hechos objeto de estudio comprende desde –al menos– el año 2011 y hasta el 14 de diciembre del año 2013 (FBB 12000124/2012/TO1).

En definitiva, los hechos investigados en los ilícitos precedentes a la maniobra de lavado aquí pesquisada, datan de fechas anteriores al objeto de este proceso, razón por la cual, se propone al acuerdo la desestimación del referido agravio.

F) Con respecto al agravio vinculado con el monto de la responsabilidad civil tampoco habrán de prosperar.

Las sumas fijadas se encuentran debidamente fundadas en el resolutorio cuestionado y aparecen como un guarismo razonable, ajustado a las circunstancias de la causa. Máxime cuando su graduación es prescindente de la situación económica de los imputados.

A lo que cabe agregar que, aunque no se haya detallado lo correspondiente a cada rubro de los indicados en el art. 518 del CPPN, sí se especificó, al contrario de lo que intenta hacer ver la defensa, cuáles eran los parámetros que llevaron al Juez *a quo* a determinar dicho monto, por lo que cabe confirmar la medida de carácter real ordenada.

7. Situación procesal de Domingo Tomás Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso.

Corresponde ahora ingresar en el estudio del recurso de apelación deducido por el Dr. Gabriel Jarque, en ejercicio de la defensa de Domingo Tomás Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, el



cual más allá de la coincidencia en cuanto a los agravios, será analizado de manera individual respecto de cada uno de ellos.

7.1. Situación procesal de Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso.

A) El primer término se agravia la defensa de la ley aplicable al caso, entendiendo que el resolutorio de la instancia pretende atribuir responsabilidad penal a los encartados por conductas que habrían sido desplegadas en un período de tiempo en el que no configuraban delito.

La cuestión de la ley aplicable al presente caso fue contestada al responder dicho agravio en el apartado 6 a) sobre la situación procesal de Rogelio Alberto Chanquía, por lo que habré de remitirme a los allí expuesto a los fines de evitar reiteraciones innecesarias.

B) En segundo orden, cuestiona la decisión del *a quo* en cuanto a la falta de acreditación del ilícito penal precedente, y la supuesta ausencia de sentencia condenatoria firme, amparándose en la necesidad de preservar el principio de inocencia, circunstancia que impide –a su juicio– tener por configurado el delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del CP.

Tal como fuera expuesto a lo largo del presente, dicho agravio será rechazado en virtud de las valoraciones de hecho y de derecho que serán desarrolladas en el punto vinculado a la calificación legal.

Sin perjuicio de ello, y a los fines de establecer el proceso de subsunción de la conducta del encartado al tipo penal atribuido, habré de destacar que, la valoración de los elementos probatorios incorporados al legajo permite tener por acreditado, tal como fuera considerado en la instancia, que Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso cobraba cheques de las firmas Attimo Bahía Blanca SA, CVP Industria SA y M-Magna SA y que además los endosaba. Asimismo, tal como se señaló en oportunidad de analizar la situación de Chanquía, el encausado fue registrado como empleado del contador de Juan Ignacio Suris, desde el mes de mayo de 2012 al mes de enero de 2013.

En el proceso donde se investigaron los ilícitos penales tributarios se acreditó que Ferrari Reynoso cobró una gran cantidad de cheques emitidos por las firmas vinculadas a Juan Ignacio Suris, a saber: Attimo Bahía Blanca

USO OFICIAL



SA, CVP Industria SA y M-Magna SA, por sumas aproximadas a los dos millones de pesos.

La decisión de mérito dictada valoró los informes de AFIP que dieron cuenta que en muchas circunstancias el dinero ingresaba en las cuentas de aquellas empresas y el mismo día, o al siguiente, era retirado por Ferrari Reynoso mediante el cobro de varios cheques que, en sumatoria, representaban la suma total depositada.

En conclusión, el tramo fáctico de participación penal del encausado fue debidamente valorado en la instancia, y se advierte que su intervención excedió la mera prestación de trabajos de cadetería ya que, por el contrario, facilitó la integración, en el patrimonio de Suris, de dinero proveniente de un ilícito penal, con aparente origen lícito, por lo que habré de propiciar la confirmación del auto de mérito dictado a su respecto.

C) Se agravia la defensa además del hecho de que se invoquen prácticas de lavado de activos desde el año 2008, derivadas de presuntos delitos que deben resultar antecedentes, pero son posteriores.

En relación a ello, y en los mismos términos que lo resuelto al referirme a idéntico agravio formulado por la defensa de Rogelio Alberto Chanquía – al que me remito a los fines de evitar reiteraciones–, propiciaré al acuerdo la desestimación del mismo, en el entendimiento de que los hechos que conforman el ilícito precedente datan de un período temporal anterior.

7.2. Situación procesal de Nicolás Ibarra Gutiérrez.

La defensa de Nicolás Ibarra Gutiérrez se agravia de la participación asignada en el auto de mérito como ‘lavador en beneficio de Juan Suris’, argumentando que el Juez de grado arriba a tal conclusión, sin tener acreditado al elemento subjetivo de la figura aplicada, lo que resulta esencial para el dictado de procesamiento.

En respuesta al agravio señalado cabe destacar que del análisis hermenéutico de los elementos de prueba incorporados a la pesquisa surge, con el grado de convicción propio de la etapa que se transita, no sólo la participación objetiva del imputado en las maniobras de lavado, sino además el claro conocimiento y la

USO OFICIAL



USO OFICIAL

intención del mismo, como elementos del tipo subjetivo requerido por el tipo penal aplicable.

El delito de lavado de activos es un delito doloso. Así, no existen controversias acerca de que se requiere dolo directo para tener configurada esa faz del tipo.

Ahora bien, de las circunstancias acreditadas en el caso, se advierte que Nicolás Ibarra Gutiérrez realizó actos demostrativos del conocimiento requerido por el tipo penal, acerca del origen espurio de los fondos.

En ese orden, constituyó junto con Juan Ignacio Suris cuatro firmas, a saber: M-Magna SA, CVP Industria SA, Brockers Group y Crear Visión SA. (conf. informe de fs. 361, Actuación Notarial nro. 011866055 de fs. 413/416 y Actuación Notarial nro. 00860544 de fs. 420/422).

La decisión de la instancia valoró además que, Nicolás Ibarra Gutiérrez integró la firma Attimo Bahía Blanca SA en carácter de presidente, de la que a su vez Juan Ignacio Suris era apoderado, desde donde se emitieron facturas “A” por un importe neto de \$7.197.337 desde el 06/2009 al 12/2011 con un IVA discriminado de \$1.509.340,96 (fs. 788/790 y 1027/1037).

En el mismo sentido, fue debidamente valorado que, Nicolás Ibarra Gutiérrez, junto con Suris, fueron cotitulares de la cuenta nro. 62070501725 del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la que se advirtieron acreditaciones bancarias por \$2.109.216; poseía un saldo de \$1.735.204,51; contra dicha cuenta se emitieron cheques por \$1.208.203 y adquirieron USD 48.587 mediante doce operaciones de compra. Asimismo, se tuvo en cuenta lo informado por la Inspección General de Justicia, informe del que surge que, Juan Ignacio Suris se encontraba vinculado a las sociedades Bocker Group SA, en carácter de presidente, junto con Nicolás Ibarra Gutiérrez como director titular, y Crear Visión SA, con el cargo de director suplente, también junto con el mencionado Ibarra Gutiérrez como presidente (conf. informe de fs. 361, Actuación Notarial nro. 011866055 de fs. 413/416 y Actuación Notarial nro. 00860544 de fs. 420/422).

En dicho sentido, surge del escrito de AFIP (fs. 1040) que las cuentas corrientes que las firmas M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA y CVP Industria SA poseían en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre los años 2009



y 2011 recibieron acreditaciones bancarias por un total de \$11.591.341,48 y que la mayoría de los cheques emitidos contra dichas cuentas habían sido cobrados, en lo que aquí interesa, por Ibarra Gutiérrez y Ferrari Reynoso y en alguna oportunidad por Goenaga.

Así, la decisión dictada valora objetiva y razonadamente los elementos de prueba incorporados al legajo, en tanto respecto de M-Magna SA, en la causa nro. FBB 12000018/2011 se concluyó que la sociedad no desarrollaba la actividad por la que fue registrada, sino que se dedicaba a emitir y comercializar facturas. Aun así, una cuenta bajo titularidad de dicha sociedad en el Banco de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 2010 y julio de 2011 tuvo acreditaciones por \$3.882.128,69 y los cheques girados totalizaron la cantidad de \$2.494.052.

También surgieron 99 cheques librados por la firma, por un total de \$363.284,83, los cuales fueron rechazados por falta de fondos entre los días 21 de junio de 2011 y 18 de octubre de 2013.

Se advierte que el auto de mérito contempló que entre el 26 de abril de 2011 y el 22 de julio del mismo año la firma adquirió USD 43.000 mediante nueve operaciones de compra, y que respecto de CVP Industria SA, de la causa nro. FBB 12000018/2011 surgió que si bien la empresa no desarrollaba las actividades económicas para las cuales estaba inscripta, no obstante, tuvo acreditaciones bancarias entre 2009 y 2011 por un total de \$7.429.720.

De la evidencia recolectada en autos, se advierte razonable la conclusión arribada en la decisión que viene apelada, e inverosímil el argumento expuesto, vinculado a la falta de conocimiento de la procedencia del origen del dinero, ya que la utilización de las empresas que Ibarra Gutiérrez conformó, fue clave en el desarrollo de las maniobras de lavado, permitiendo que el dinero de origen desconocido ingresara en las cuentas corrientes de las firmas, simulando ser el pago en contraprestación del servicio supuestamente prestado conforme las facturas emitidas, y luego era extraído mediante el cobro de cheques efectuado por terceras personas – generalmente por Ferrari Reynoso– aunque en alguna oportunidad también lo hizo directamente Ibarra Gutiérrez.

Nada permite sostener la alegada ajénidad del encausado en la operatoria examinada, resultando los argumentos vinculados con su desconocimiento

USO OFICIAL



USO OFICIAL

del origen espurio del dinero meras alegaciones incompatibles con la evidencia colectada en autos.

De lo expuesto, se advierte con meridiana claridad el conocimiento por parte de Ibarra Gutiérrez de la procedencia ilícita de los bienes. Los elementos probatorios reunidos, y legítimamente incorporados al presente legajo, permiten afirmar con el grado de probabilidad propia de esta etapa, el conocimiento del encartado no sólo de la procedencia ilícita de los bienes, sino también la realización específica de maniobras de lavado, tendientes a integrar al circuito legal el producto del ilícito precedente.

En razón de lo expuesto, habré de propiciar la confirmación del auto de mérito dictado a su respecto.

7.3. Situación procesal de Domingo Tomás Goenaga.

A) La defensa de Domingo Tomás Goenaga formuló agravio afirmando a su respecto la ausencia de elementos de prueba en relación a su participación, y la aplicación del calificante en su carácter de contador por el hecho de ser profesional contable.

A efectos de no reiterar el agravio planteado en relación a la aplicación de la figura agravada por su calidad profesional, en tanto el mismo fue analizado en el caso del procesado Chanquía, me remito a las consideraciones allí vertidas, y propongo al acuerdo su desestimación.

Sin perjuicio de lo expuesto, de las constancias del presente legajo, se encuentra acreditado que Domingo Tomás Goenaga en su carácter de organizador, aportó a la estructura utilizada por Juan Ignacio Suris y los ejecutores, los conocimientos técnicos y profesionales, adquiridos en virtud de su profesión de contador, de acuerdo a lo determinado en el marco de la causa FBB 12000018/2011.

A su respecto, la decisión de la instancia valora adecuadamente los elementos probatorios de cargo, y concluye que se encuentra probada su participación en el hecho pesquisado a raíz del aporte de sus conocimientos en materia contable, así como también de la realización de actos concretos dentro de las etapas que conforman el delito investigado.

Para sostener dicho procesamiento, se valora que según fuera informado por la UIF y la AFIP, Goenaga fue autorizado, a través de los contratos



sociales de las firmas Scarsur Bahía SA y E&J Argentina SRL, a realizar los trámites pertinentes para gestionar y solicitar su inscripción en los órganos de contralor (fs. 471/484).

La decisión de mérito analizó especialmente que el nombrado fue consultado en el proceso de fiscalización llevado a cabo ante AFIP acerca del origen de cuatro cheques que cobró en la Sucursal Universitario del Banco de la Provincia de Buenos Aires el 19/10/2010 por un monto de \$50.000 emitidos al portador contra la cuenta de M-Magna SA, habiendo manifestado que se lo entregaron en una distribuidora donde había solicitado un préstamo. Asimismo, respecto de los cheques cobrados en las mismas condiciones, pero contra la cuenta de Attimo Bahía Blanca SA, manifestó que eran préstamos otorgados por Suris (cfr. informe de AFIP fs. 1027/1037).

En dicho informe, además AFIP destacó una manifestación de Suris en el mismo proceso de fiscalización, en la que refirió que Goenaga era quien realizaba la mayoría de los depósitos que ingresaban en la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires perteneciente a la firma CVP Industria SA.

Se encuentra provisoriamente acreditado en autos que Goenaga cobró cheques emitidos contra la firma M-Magna SA por un monto de cincuenta mil pesos (\$50.000) cada uno, no pudiendo ignorar la procedencia ilícita del dinero depositado en esa cuenta, en tanto fue quien aportó sus conocimientos contables para desplegar las maniobras que motivaron su imputación en el expediente donde se investigaron –y resultó condenado– por conductas constitutivas del delito de asociación ilícita fiscal. En este sentido, resulta improbable que casualmente haya recibido, producto de otra operación, documentos girados contra la cuenta de una de las firmas de la que llevaba la contabilidad, como lo era M-Magna SA. A idéntica conclusión se arriba respecto de los cheques cobrados contra la cuenta Attimo Bahía Blanca SA.

Sentado ello, del tramo fáctico que involucra a Goenaga, se advierte su participación y realización de actos concretos de integración del dinero de origen espurio que se encontraba depositado en las cuentas bancarias de las firmas que Suris había conformado, retirándolo mediante el cobro de los cheques mencionados *ut supra*.

USO OFICIAL



USO OFICIAL

Se advierte así que, tanto la conducta de Goenaga, como la de Chanquía, en su doble faceta de desempeño profesional como contadores y sus participaciones activas en el lavado de dinero investigado, posibilitaron el comportamiento antijurídico de los restantes imputados, extremo que desvirtúa cualquier pretensión de aparentar sus intervenciones en un rol estereotipado e inocuo.

En definitiva, el agravio planteado por la defensa en relación a Domingo Tomás Goenaga, no logra conmover el resolutorio dictado en la instancia, por lo que propongo al acuerdo su rechazo.

B) Desde otro aspecto, se agravia la defensa respecto a la traba de embargo, y que la medida haya sido dispuesta sin atender a las situaciones actuales de cada uno de los encartados.

Con relación a dicho planteo y tal como fuera señalado en oportunidad de responder similar agravio al tratar la situación de su consorte de causa, las sumas fijadas como medida cautelar de carácter real se encuentran debidamente fundadas en el resolutorio cuestionado, y aparece como un guarismo razonable, ajustado a las circunstancias de la causa.

8. Situación procesal de Fabio Héctor Crucianelli.

A) Ingresando en el estudio del recurso de apelación deducido por la defensa de Fabio Héctor Crucianelli se advierte que su defensa se agravia, en lo sustancial, de la arbitrariedad en la valoración probatoria efectuada por el magistrado de grado, manifestando que a su entender no se encuentran acreditadas circunstancias fácticas constitutivas del delito previsto en el art. 303 del CP.

En respuesta a tales argumentos, cabe destacar que, el auto recurrido no sólo se encuentra ajustado a las reglas de la lógica y la sana crítica sino que, además, se ajusta a los parámetros de fundamentación previstos en el artículo 123 del CPPN.

La decisión de la instancia valoró elementos probatorios, legítimamente producidos e incorporados al proceso, que permiten tener por acreditado que el encartado era el titular de un vehículo marca Mercedes Benz, modelo CLS 350 E-C 2006, dominio colocado FZL 698 (conf. Informe histórico de dominio del Registro Nacional de la Propiedad Automotor fs. 544/548).



Que, quién contrató la póliza de seguros de dicho vehículo en el período comprendido entre el 08/07/2010 hasta el 08/01/2011 fue Juan Ignacio Suris (conf. Informes producidos por las compañías de seguros, información de la DNRPA de fs. 540 e informe histórico de la UIF de fs. 545/548). Y fue quién además, obtuvo una cédula azul a su nombre en fecha 03/09/2009.

La decisión de mérito además, valoró el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) nro. 3773 a su respecto emitido por el Banco Citibank el 27/04/2011, por haber recibido en dicha entidad bancaria 84 depósitos en efectivo en su cuenta corriente, desde el mes de octubre de 2010 hasta abril de 2011 por una suma de \$504.801, sin que se hubiera aportado documentación suficiente y consistente en tanto sostuvo que el dinero provenía de la venta de un vehículo Grand Cherokee, dominio GXZ 947 y de un Mercedes Benz, aunque respecto del primer vehículo se mantuvo bajo su titularidad luego del acto de venta (Conf. Informe de la UIF de fs. 647/648.).

A su turno, fue debidamente analizada la declaración del encartado (fs. 1822/1826) y contrastada con los elementos probatorios reseñados *ut supra*, lo que permitió concluir que su descargo luce como inverosímil, en tanto en el contexto global de las presentes actuaciones, los restantes consortes de causa invocaron, también, el haber “prestado” a Suris distintos vehículos –coincidiendo en la operación de contratar pólizas de seguro, y extender cédulas azules a nombre de aquél, habilitando las conducción por parte del mismo– circunstancias que permiten sospechar, con un alto grado de probabilidad, que en verdad, Suris era el verdadero propietario de aquel vehículo y que Fabio Héctor Crucianelli intervino en carácter de lavador, ocultando su real procedencia.

En tal sentido, el resolutorio impugnado por el recurrente tuvo debidamente en cuenta la fecha de adquisición de la titularidad del vehículo Mercedes Benz y la coincidencia con la fecha de extensión de la cédula azul en favor de Juan Ignacio Suris –03/09/2009– circunstancia que refuerza la hipótesis de que el real propietario del bien era Suris.

Así, la intervención de Fabio Héctor Crucianelli –quien se encuentra ligado además a Suris por un vínculo de amistad y confianza– se observa como necesaria, en tanto facilitó con su aporte los medios para que el dinero de Juan

USO OFICIAL



USO OFICIAL

Ignacio Suris ingresara como tal, o a través de bienes subrogantes, al circuito legal con apariencia de origen lícito.

En definitiva, la resolución de mérito, en lo que respecta a la participación de Fabio Héctor Crucianelli, exhibe un plexo probatorio contundente – donde se incluyen pruebas directas e indirectas que meritadas en forma conglobada– examinado críticamente bajo una argumentación lógica, que no ofrece quiebres y que ha permitido arribar –de conformidad con el estándar probatorio que rige la etapa procesal actual– a la materialidad del hecho y la intervención que en él le cupo al aquí procesado, sin que se demuestre arbitrariedad alguna en la valoración de la prueba, razón por la que propondré al acuerdo el rechazo del agravio planteado a su respecto y, por ende, la confirmación del procesamiento dictado en la instancia de grado.

9.1. Calificación legal.

En respuesta a los diversos planteos por parte de las defensas sobre la figura penal aplicada en el auto recurrido, entiendo prudente desarrollar algunas aclaraciones relacionadas con los requisitos de configuración.

El tipo penal de lavado de activos según la ley 26.683 (art. 303 del CP) publicada en el Boletín Oficial el 21/06/2011, vino a incorporar el Título XIII, en el Libro Segundo de nuestro código de fondo, al que denominó “Delitos contra el orden económico y financiero”, introduciendo los artículos 303, 304 y 305 en los que respectivamente ubicó la nueva figura de lavado de activos provenientes de un ilícito penal, regulando a la vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si el lavado fue realizado en nombre propio, y legislando sobre el decomiso y medidas cautelares para asegurar los bienes.

Como explica la doctrina, el principal objetivo fue legislar el nuevo delito de lavado de activos como una figura autónoma, para dejar de concebirlo como una forma de encubrimiento. De todas maneras, su estructura y su finalidad no variaron de manera sustancial, a excepción de la modificación de ciertas pautas. Por ejemplo, la más trascendente es que se suprimió la exigencia de que el autor del lavado no hubiera participado en la actividad delictiva previa para que, en la nueva versión, sí se lo considere como eventual partícipe en la actividad desplegada para darle licitud al provecho económico extraído del ese hecho ilícito primigenio. Es decir, la nueva versión admite el autolavado. A su vez, en lo que respecta a las condiciones objetivas



de punibilidad, a diferencia de la norma anterior que establecía un monto de cincuenta mil pesos (\$50.000) para tener por configurada la maniobra en lo que respecta a la adquisición de los bienes provenientes de un delito y darles apariencia de legalidad, la actual redacción eleva el monto a la suma de trescientos mil pesos (\$300.000). De todas maneras, la ley 26.683 incorporó, dentro del art. 303, el inciso 4° que establece un monto menor de pena para el caso de que, el valor de los bienes no superan tal suma.

Así, el art. 303, inc. 1° quedó redactado de la siguiente manera “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

Para determinar cuál es el bien jurídico protegido por la norma, la doctrina no ha consolidado una postura unánime. Es que existen discrepancias al respecto. En este punto, coincido con la postura asumida por Fontán Balestra al afirmar que “el legislador decidió imponer una protección supraindividual sobre el propio funcionamiento del sistema económico financiero, por considerar que era el principal bien jurídico lesionado por el fenómeno delictivo del lavado de dinero. En consecuencia, abandonó la anterior regulación de la figura como una forma agravada de encubrimiento para tipificarla como delito autónomo que procura proteger a la economía legal de los efectos nocivos provocados por la puesta en circulación de bienes de origen espurio. Ello no significa negar que las conductas típicas de lavado puedan lesionar la administración de justicia, sino, antes bien, implica reconocer que su afectación trasciende a dicho bien jurídico, ya que también involucra a los intereses colectivos amparados penalmente por el art. 303 del Código” (vr. Fontán Balestra, Ob. Cit, págs. 605/606).

En lo que respecta al tipo objetivo de la figura se deben tener en cuenta las siguientes pautas: qué particularidades debe tener el sujeto activo (autor), cuál o cuáles son las acciones típicas que regula la norma, cuál es el objeto de la

USO OFICIAL



USO OFICIAL

acción, quiénes pueden ser los sujetos pasivos que protege la figura y a los que está dirigida la acción y de qué tipo de delito se trata.

En lo que atañe al sujeto activo, explica la doctrina que a partir de la sanción de la ley 26.683 el lavado de dinero ha pasado a ser un delito de autor indistinto que puede ser cometido por cualquier persona. Diferente postura a la asumida en la anterior versión en cuanto a que el autor podía ser quien llevara a cabo alguna de las acciones de lavado mencionadas en el tipo sobre bienes provenientes de un delito en el que “no hubiera participado” (ver Fernando Córdoba, Ob. Cit., págs. 30/31). El autolavado es punible con esta nueva versión. Es decir una misma persona puede ser pasible de imputación en la misma maniobra delictiva por la cual genera ganancias que luego introduce al sistema económico dándole una apariencia de legalidad ficta.

Así, tal como se deduce de la descripción de cada uno de los sucesos que se tuvieron por acreditados en la instancia, si bien es cierto que las maniobras de lavado de activos tuvieron un inicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley en cuestión, la administración de los bienes que se adquirieron continuó con posterioridad a tal hito por lo que también encuadran bajo esta prescripción.

En lo que hace a las acciones típicas que conforman la figura básica, la figura en cuestión individualiza algunas acciones características, pero concluye en una definición genérica que pretende abarcar cualquier otro supuesto, de modo que dicha enunciación no es taxativa, sino que sólo detalla, a modo ilustrativo, algunas operaciones que el legislador consideró frecuentes en las maniobras de lavado. Según el Diccionario de la Lengua Española las acciones específicamente enumeradas consisten en convertir –desvincular bienes de su origen mediante su sustitución por otros distintos–, transferir –modificar la titularidad mediante cualquier forma de transmisión, sin necesidad de que medie un desplazamiento fáctico de los bienes, para distanciarlos de su origen–, administrar –manejar los bienes provenientes del delito previo, de modo tal que puedan ser aprovechados mediante su puesta en circulación con disimulo de su origen–, vender –entregar a otro un bien como contrapartida del pago de un precio en dinero, principalmente–, y gravar –dar los bienes en garantía de una obligación–.



En tal sentido, al describir las acciones típicas y afirmar entre ellas “o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado”, el acto de disimular podría ser definido como el hecho de encubrir con astucia la intención o dar una apariencia diferente a la real. En tanto, poner en circulación hace alusión a las actividades relacionadas con el movimiento de activos en el mercado económico o financiero bajo alguna otra forma jurídica o material que no sea las detalladas anteriormente (ver Tazza, Alejandro “El nuevo delito de blanqueo de capitales”, publicado en DJ 10/08/2011, pp. 97). Es decir, ingresar el bien en el mercado formal, sin que resulte menester que haya sido aceptado como legítimo.

Aclarado ello, y teniendo presente los agravios planteados por la defensa de quienes resultaron procesados en la decisión de mérito, corresponde analizar la concepción y el alcance que la doctrina y la jurisprudencia le ha dado al ilícito penal precedente. En tanto el cuestionamiento se ha desarrollado en relación a la pretendida falta de acreditación del ilícito penal precedente, aduciendo que debería tratarse de una sentencia condenatoria firme.

Pues, resulta en definitiva la columna vertebral de la figura de lavado de activos. Es coincidente la doctrina en torno a que no hace falta que el hecho anterior del cual provienen los bienes haya sido un hecho culpable y punible, sino que basta que haya sido típico y antijurídico, es decir un hecho ilícito.

De hecho, se tiene dicho que para evitar confusiones no fue casual que con la sanción de la ley 26.683 se haya reemplazado la expresión “delito” por la de “ilícito penal” claudicando así toda posibilidad de algún tipo de interpretación que exija algo más que la configuración de la tipicidad y la antijuricidad. Incluso se acepta que el delito precedente pueda ser tentado o consumado (ver Córdoba, Fernando, Ob. Cit. pp. 135/137).

Sentado ello, tal como ya he señalado, se encuentran múltiples elementos que permiten tener sobradamente por acreditados los ilícitos penales precedentes.

En el caso que nos ocupa, ya fue determinada en primera instancia la responsabilidad penal que le cabe a Juan Ignacio Suris y sus consortes de causa en las actuaciones sobre el delito asociación de ilícita fiscal (cfr. FBB 12000018/2011) y comercialización de estupefacientes (cfr. FBB 12000124/2012).



USO OFICIAL

Sobre el punto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal sostiene que “no es necesario que, con relación al primer hecho, se verifique la existencia de una sentencia firme que tenga por probado el hecho subyacente, su configuración típica y por ende un responsable; sino que basta, a los fines de investigar el acto encubridor, que se haya comprobado que el primer hecho era típico...” afirmándose al mismo tiempo que “el requisito que los bienes objeto del blanqueo tengan su origen en un delito previo –así sean su ‘producto’, o provengan de él como ‘subrogantes’ es común a la legislación comparada en la materia, y que determinarlo es ‘imperioso’, en aras de la defensa del principio de legalidad, ya que, como se advierte de la lectura de distintas formulaciones típicas, que se trate de bienes provenientes de uno u otro tipo de delito conllevará al necesario encuadre legal, sea como delito de lavado de dinero u otro; o en su caso, resultará necesario para determinar cuál será la pena que corresponde imponer, debido al agravamiento de la sanción cuando el proceso de ocultamiento se efectúe con relación a bienes provenientes de determinados hechos probados...” (cfr. CFCP, Sala 3°, c. n° 1313/13, “Sánchez”, reg. 2377, del 11/11/2014; y en el mismo sentido ver “Álvarez” de la Sala 4° y Sala I, c. n° 1686, “Bustamante, reg. 873/16.1, del 26/05/2016).

Por su parte, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, sostuvo que el lavado de dinero resulta un delito autónomo, sin necesidad de la acreditación del delito subyacente con una sentencia previa, resultando suficiente una referencia genérica al origen de los mismos. Entendió que, como regla de valoración del ilícito antecedente, que el artículo 9, apartado 5, del Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, investigación, embargo y comiso del producto de delitos y sobre financiación del terrorismo (Convenio de Varsovia 2005), establece que la condena previa o simultánea del delito precedente no representa un pre requisito para la condena por blanqueo. Se refiere a prueba razonable de una actividad ilícita con categoría de delito con capacidad para poner en riesgo el bien tutelado por el art. 303 del Código Penal a partir de los datos disponibles, cualesquiera sean estos. El ilícito precedente debe hallarse objetivamente vinculado con delitos susceptibles de generar ganancias, atento el carácter esencialmente económico del lavado de activos (conf. CPF 3017/2013/227/CA62, del 28 de octubre de 2017, y sus citas).



En consecuencia, no se exige en modo alguno, la corroboración judicial del hecho delictivo previo, mediante una sentencia firme, ya que solamente basta para cumplir la exigencia objetiva, tener por acreditado que los bienes objeto del caso proceden de hechos susceptibles de ser calificados como delitos, o que poseen un origen delictivo, siendo suficiente la relación de los imputados con actividades delictivas.

De lo reseñado en el presente legajo, se encuentra debidamente probado el ilícito penal precedente, y no simplemente la vinculación de los procesados con el mismo, sino incluso la responsabilidad penal en dichos procesos.

A saber, el 03/11/2023 en el marco de la causa FBB 12000018/2011/TO1 el requerimiento fiscal apuntó contra Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga, como coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal, en ese entonces previsto y reprimido por el art. 15 inc. “c” de la ley 24.769. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó sentencia condenatoria por la comisión de tal ilícito.

A su turno, en el expediente nro. FBB 12000124/2012 en el que se investigaron conductas en infracción a la ley de estupefacientes, el Tribunal Oral interviniente dictó sentencia condenatoria respecto de Juan Ignacio Suris, Guillermo Martín Suris y Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso, entre otros, como coautores del delito de comercialización de estupefacientes agravado por la concurrencia organizada de tres o más personas (arts. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” de la ley 23.737).

Sentado ello, y sin perjuicio de que fue establecido que no constituye un requisito de la figura legal contar con sentencia condenatoria firme, de la compulsa del SGJ Lex100 surge que el Tribunal de juicio dictó sentencia condenatoria unificando las penas dictadas.

Despejado el cuestionamiento desarrollado *ut supra*, y respecto al plano subjetivo del tipo, tampoco existen controversias acerca de que se requiere dolo directo para tener configurada esa faz del tipo.

En el caso de Juan Ignacio Suris, las circunstancias fácticas acreditadas permiten, con el grado de probabilidad propio que rige la presente etapa, situarlo como jefe u organizador de la operatoria fraudulenta investigada, quien

USO OFICIAL



USO OFICIAL

además se benefició particular y directamente de ella. Nótese que todos sus consortes de causa se vinculan directamente con él –contadores, cónyuge, familiares y amigos– e indirectamente entre sí, generando así un círculo a su alrededor de personas de su confianza que le sirvieron como un medio para darle apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de aquellos injustos subyacentes.

Es dable presumir, a partir del estrecho vínculo que mantenían, que conocían la actividad ilícita precedente, en tanto resultaron además procesados y condenados en los ilícitos penales precedentes; sumado a que los procesados no registraban actividades comerciales lícitas declaradas que justificaran la adquisición de los bienes, ni declararon ante la AFIP las ganancias obtenidas del cobro de los cheques en las entidades bancarias.

Por tanto, las circunstancias reseñadas otorgan mayores indicios aún de que los procesados conocían, o debían conocer, el origen espurio de los bienes que adquirieron o administraron en su nombre.

9.2. Aplicación del delito de lavado en el caso concreto.

A los fines de valorar los elementos de prueba incorporados al presente legajo, se tendrá en cuenta el estándar establecido en el precedente “Sánchez” (CFCP, Sala 3°, c. n° 1313/13, reg. 2377, del 11/11/2014). Es que allí la casación, en un caso de lavado de activos (en su versión anterior estipulada en el art. 278 del CP) estableció una serie de parámetros a tener en cuenta al momento de evaluar si nos encontramos en presencia de una maniobra de blanqueo de capitales.

En ese contexto, el tribunal revisor con cita doctrinaria y jurisprudencial afirmó que “el blanqueo es una actividad criminal muy compleja, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento, y en el que la vinculación con el delito previo no puede supeditarse a la estricta aplicación de las reglas de la accesoriedad que puedan condicionar su naturaleza de figura autónoma...”. De allí que para acreditar el delito precedente y su enlace con el consecuente (el lavado) la prueba de indicios sea especialmente idónea y útil para suplir las carencias de la prueba directa en los procesos penales relativos a estas y otras actividades delictivas encuadradas en lo que se conoce como criminalidad organizada, y evitar así las parcelas de impunidad que podrían generarse en otro caso respecto a los integrantes de estas organizaciones



delictivas. En la práctica procesal penal será habitual que no exista prueba directa de estas circunstancias, y al faltar ésta deberá ser inferida de los datos externos y objetivos acreditados...” (Prueba de presunciones o prueba de indicios)” (Tribunal Supremo Español, Sala Penal, sentencia STS 3614/1997, del 23/05/1997).

A partir de ello, y con el fin de perseguir y enjuiciar a los responsables de esta clase de delitos, y de aquellos por los cuales éste (lavado de activos) los permite y los fomenta (como pueden ser la trata de personas, el tráfico de estupefacientes, la corrupción de funcionarios públicos) se establecieron criterios de valoración de la prueba. Uno de los indicios más determinantes, se dijo (conforme el Tribunal Supremo Español, Sala Penal, sentencia *ut supra* citada), consiste en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que, por su elevada cantidad, la dinámica propia de las transmisiones, y al tratarse justamente de efectivo, ponen de manifiesto o exteriorizan operaciones extrañas si se las compara con prácticas comerciales habituales.

Otro de los indicios, se afirmó, radica en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen, precisamente, ese incremento patrimonial derivado de la práctica anterior. También, se expresó, deben comprobarse ciertos vínculos con actividades relacionadas al tráfico de estupefacientes. Y, por último, concatenado con los criterios mencionados, se precisó que se requiere para establecer la procedencia de los bienes, la comprobación de una actividad delictiva previa de modo genérico que permita el desplazamiento de otros orígenes posibles –sin que sea necesario, se aclaró, la demostración plena de un acto delictivo específico ni de sus intervinientes–. Incluso, para la constatación de ese vínculo o conexión con actividades delictivas, como uno de los presupuestos básicos para la aplicación de este tipo penal, no es necesario que se supere el plano indiciario, debido a que la demostración plena de esos vínculos conduce indefectiblemente a la valoración de la conducta del presunto autor como una forma de participación en el delito antecedente.

Sobre la base de tales consideraciones, a mi juicio, el cuadro probatorio reunido en la presente instrucción alcanza para tener por acreditado, con el grado de probabilidad que es propio de la etapa procesal que se transita, que los nombrados habrían desplegado las conductas típicas previstas en el art. 303, incs. 1 y 2 del CP.

USO OFICIAL



USO OFICIAL

Al respecto, nótese que del informe del Registro Automotor y Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS): Juan Ignacio Suris registró la titularidad del Vehículo marca Toyota, modelo Corolla, dominio colocado EEV 527, asegurado en Compañía Federación Patronal CSL (conf. informe de dominio de fs. 266/267). Que de acuerdo a lo informado por AFIP, se encontraba registrado para el desarrollo de actividades vinculadas a servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial en sociedades anónimas y como integrante de las siguientes sociedades: Scarsur Bahía SA en formación con Sergio Luis Scarabotti; E&J Argentina SRL; M-Magna SA –director titular–; CVP Industria SA –presidente– (conf. informe AFIP fs. 213/216).

Por su parte, la Inspección General de Justicia informó que Suris se encontraba vinculado a las sociedades Bocker Group SA en carácter de presidente junto con Nicolás Ibarra Gutiérrez como director titular y Crear Visión SA con el cargo de director suplente, también junto con el mencionado Ibarra Gutiérrez como presidente (conf. informe de fs. 361, Actuación Notarial nro. 011866055 de fs. 413/416 y Actuación Notarial nro. 00860544 de fs. 420/422).

Las compañías de Seguros dieron cuenta en relación a las pólizas contratadas por Juan Ignacio Suris, que: Seguros Rivadavia: Suris contrató desde el 22/01/2010 al 22/07/2010 el seguro del rodado marca Ford, modelo Ecosport, dominio colocado EPP 513, el cual fue anulado el 05/02/2010. En dicha oportunidad revestía la titularidad del rodado una persona de nombre Norberto Luis García (conf. informe de dominio de fs. 314/315); – Zurich Argentina Compañía de Seguros: desde el 29/10/2008 hasta el 02/03/2009 contrató la póliza de seguro de un rodado marca Ford, modelo KA, dominio colocado HBW 259. Desde el 21/08/2008 hasta el 28/07/2009, en la misma aseguradora, renovó póliza del rodado marca Peugeot, modelo 206, dominio colocado FZN 038, la cual fue cancelada el 21/01/2009 (según informe de AFIP de fs. 338 desde el 2008 al 2010, Suris registraba la titularidad de ese vehículo); – RSA S.A.: celebró contrato de renovación de póliza de seguros –entre el 08/07/2010 hasta el 08/01/2011– del vehículo marca Mercedes Benz, modelo CLS 350 E-C 2006, dominio colocado FZL 698 mientras Fabio Héctor Crucianelli era su titular (conf. información de la DNRPA de fs. 540 e informe histórico de la UIF de fs. 545/548). Desde el 18/08/2010 al 18/02/2011 contrató la póliza del rodado marca



BMW 323i, Sedan Executive, dominio colocado HWW 812 mientras Gabriela Alejandra Pegoraro era su titular (conf. información de la DNRPA de fs. 540 e informe histórico de la UIF de fs. 545/548). Desde el 24/08/2010 al 24/02/2011 celebró un contrato de póliza de seguro respecto del vehículo marca Audi, modelo A4 3.0 TDI QUATTRO, dominio colocado FIV 915, mientras eran cotitulares Silvia María Raggio y Fernando Guillen (conf. informe histórico de la UIF de fs. 545/548). En fecha 04/10/2010 registró un cambio de unidad por el vehículo marca BMW 335i, Coupe M Sport Biturbo, dominio GDM 652 hasta el 24/02/2011, mientras era titular la firma Lucio V López SA (conf. información de la DNRPA de fs. 540 e informe histórico de la UIF de fs. 545/548). En fecha 13/12/2010 volvió a hacer cambio de unidad por el vehículo marca BMW 528i Executive AUT L/10 hasta el 24/02/2011, prorrogado hasta el 24/08/2011 aunque anulado por desistimiento el 14/07/2011. En fecha 16/08/2011 contrató una póliza de seguro hasta el 16/02/2012 de un vehículo marca BMW Z4 3.0 SI ROADSTER, dominio colocado HIM 670, la cual fue anulada por incobrable el 17/03/2012, mientras era titular Mirta Olga Contreras (conf. información de la DNRPA de fs. 540). Desde el 01/09/2011 al 01/03/2012 contrató la póliza de seguro del vehículo marca Chrysler, modelo Ram 2500 TDI D/CAB, dominio colocado EVP 497, mientras era titular Raúl Eduardo Oyola (conf. información de la DNRPA de fs. 540 e informe histórico de la UIF de fs. 545/548). Contrató la póliza del vehículo marca Mitsubishi, modelo L200 3.2 CR D/CAB, dominio colocado LAM 046 la cual fue anulada por incobrable y cuyo titular era Rogelio Alberto Chanquía (conf. informe de dominio de fs. 312/313). Finalmente, informaron que respecto del vehículo marca Volkswagen, modelo Scirocco 1.4, TSI DGS, dominio colocado LSM 701 cuyo titular registral desde el 19/10/2012 era Alejandro Padelletti, resultó que Paula Valeria Wagner y Juan Ignacio Suris desde el 09/11/2012 poseían una tarjeta azul que los habilitaba a su conducción. Asimismo, surgió que dicho vehículo registraba una prenda por \$150.960 a partir del 19/10/2012 siendo el acreedor prendario el HSBC Bank Argentina SA de Capital Federal (conf. informe de consulta de dominio de fs. 128).

Por su parte, las maniobras de lavado se ven reflejadas asimismo en las cuantiosas acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de Suris.



USO OFICIAL

Así, Banco Provincia de Buenos Aires informó que era titular de una caja de ahorro en pesos: con fecha de apertura el 22/03/2010 cancelada el 13/07/2011; cuenta corriente en pesos: con fecha de apertura el 10/03/2010 y cancelada el 16/11/2011; cuenta corriente en pesos: abierta el 10/03/2010 y cerrada el 22/03/2010; tarjeta de crédito Visa Gold dada de alta el 03/2010, con fecha de vencimiento el 31/03/2013, con un límite de \$16.000 y un saldo de \$37.097,86, que fue pasada a mora el 13/07/2012 y bloqueada.

Asimismo, en el presente proceso se incorporó el Informe técnico contable confeccionado por Hernán Claudio Casassa, contador público de la División Pericias Contables de la Dirección de Delitos Económicos a través del producido por la Unidad de Investigación de Activos Ilegales.

Allí concluyó que habría una significativa inconsistencia entre los ingresos declarados por Juan Ignacio Suris ante la AFIP y las acreditaciones bancarias informadas por dicho organismo recaudador, toda vez que desde el año 2008 a 2010 se habrían acreditado en sus cuentas un total de \$6.888.005 y los ingresos que surgían de las declaraciones juradas presentadas respecto de los mismos períodos eran de un total de \$467.468,22, arrojando una diferencia de \$6.420.536,78 en concepto de acreditaciones no declaradas y que, además, no estarían respaldadas con una actividad comercial formal (fs. 435/437).

Asimismo, obra un informe de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires donde se aportó la actuación notarial nro. GAA07395646 mediante la que se constituyó la firma Scarsur SA integrada por Juan Ignacio Suris como director suplente y por Sergio Luis Scarabotti como presidente, mientras que Domingo Tomás Goenaga fue autorizado para realizar los trámites pertinentes para su conformación e inscripción ante la autoridad de contralor, aceptar observaciones e interponer recursos.

Por su parte, de la información remitida por la AFIP–DGI (fs. 496/513) surgen los movimientos bancarios de Juan Ignacio Suris desde el año 2008 hasta el 2013 que comprenden números de cuentas, entidades en las que se detallaron las acreditaciones y los cotitulares de aquéllas. De allí surgió que el nombrado poseía cuatro cuentas de las que era cotitular en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a saber: – De la cuenta nro. 62070501442 era titular la firma CVP Industria SA junto



con Juan Ignacio Suris y Nicolás Ibarra Gutiérrez como cotitulares; – De la cuenta nro. 62070501916 era titular la firma M-Magna SA junto con los nombrados en el párrafo que antecede; – De la cuenta nro. 62070501725 era titular la firma Attimo Bahía Blanca SA y cotitulares Juan Ignacio Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez y Flavio Rodrigo Carrano; De la cuenta nro. 62280500401 era titular la persona jurídica Derecho Social y cotitulares Juan Ignacio Suris, Fabián Néstor Narvaja y Hugo Daniel Ruiz.

Dichas cuentas, habrían tenido las siguientes acreditaciones teniendo en cuenta la sumatoria de todas por cada período anual: – Período 2008: \$32.835 (de la cuenta nro. 62280500401 –Derecho Social–); – Período 2009: \$365.191 (de las cuentas nro. 62280500401 –Derecho Social– y 62070501442 –CVP Industria Sociedad Anónima–); – Período 2010: \$6.489.979 (de las cuentas nro. 62070501442 –CVP Industria Sociedad Anónima–, 62070501916 –M-Magna S.A.–, 62070501725 –Attimo Bahía Blanca S.A.–, 62280500401 –Derecho Social–); – Período 2011: \$7.229.066 (de las cuentas nro. 62070501442 –CVP Industria Sociedad Anónima–, 62070501916 –M-Magna S.A.–, 62070501725 –Attimo Bahía Blanca S.A.–, 62280500401 –Derecho Social–).

En total habría recibido acreditaciones bancarias por \$14.117.071.

Por su parte, fue debidamente valorado en la decisión de mérito, el Informe técnico contable de fs. 651/657 confeccionado por Hernán Claudio Casassa, Subcomisario Contador Público de la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales a raíz de la compulsa de la información aportada por las entidades bancarias y las compañías de seguros, del que surge que: la firma Scarsur SA se habría inscripto en la AFIP-DGI el 29/04/2004 y habría declarado como actividad económica el alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operarios, servicios empresariales y de publicidad. Asimismo, no habría realizado el pago de impuesto alguno, por lo que el profesional de mención entendió que no exteriorizaba una verdadera actividad económica, por cuanto en el año 2006 –a raíz de una fiscalización– se determinó que no poseía capacidad económica.

Además, la empresa de mención no sería titular de bienes muebles e inmuebles ni habría declarado empleados a su cargo, circunstancias que no

USO OFICIAL



USO OFICIAL

se condicen con las actividades declaradas y por las que infirió que la empresa no tendría giro comercial.

En idéntico sentido, la firma E&J Argentina SRL se habría inscripto ante la AFIP-DGI el 17/11/2005 y habría declarado como actividad económica servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados, construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, servicios empresariales, servicio de gestión y logística para el transporte de mercadería, cría de ganado bovino excepto en cabañas y para la producción de leche, movimiento de suelo y reparación de terrenos para obra. Sin embargo, la empresa en cuestión tampoco sería titular de bienes muebles e inmuebles necesarios para llevar a cabo la actividad declarada y la escasez de impuestos abonados a la AFIP-DGI entre los años 2008 a 2010 denotaría que no desarrollaría actividad económica alguna.

Del citado informe técnico contable surge que la firma M-Magna SA se habría inscripto en la AFIP-DGI el 03/03/2010 y habría declarado como actividad económica la construcción, venta al por mayor de equipos de sonido de radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios, venta al por mayor de artículos de ferretería y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones. Asimismo, no habría registrado pago de impuesto alguno, circunstancia que según la valoración del profesional informante no se condecía con las acreditaciones bancarias que habría registrado por un monto de \$4.288.733 – obrantes en la base “e-Apoc”-.

A la misma conclusión arribó el perito contable respecto a la firma CVP Industria SA, en el año 2010 habría pagado \$200 por IVA, en el año 2009 \$170,85 por Impuesto a las Ganancias y \$124,09 por Bienes Personales, sumas que, según valoró, no se condecían con las acreditaciones bancarias en la cuenta de la sociedad durante aquellos años por un monto de \$7.429.720.

Con base al cuadro probatorio reseñado, el Juez *a quo* subsumió los hechos investigados en el delito de lavado de activos previsto en el art. 303 del CP, conforme al texto que le imprimió la modificación introducida por la 26.683 (B.O. 21/06/2011).

Sentado ello, adelanto que no se advierte, ni los recurrentes logran demostrar en los recursos de apelación interpuestos, la invocada falta de



fundamentación de la sentencia y tampoco se observa que no se hayan acreditado debidamente los elementos del tipo penal aplicado.

Así, resulta evidente la vinculación de Juan Ignacio Suris en los ilícitos penales precedentes, a saber, en la comercialización de estupefacientes y asociación ilícita fiscal, y la sospecha fundada de que una amplia cantidad de bienes, principalmente vehículos que se encontraban registrados a nombre de personas relacionadas con él, le pertenecían, así como también los cuantiosos montos dinerarios de las acreditaciones bancarias en las cuentas de las sociedades que conformaba, sin encontrarse ninguna de todas esas operaciones debidamente justificadas, lo que me permite sostener, y proponer al acuerdo confirmar la imputación dirigida en su contra.

Es dable advertir que el órgano de mérito al fundamentar su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación de los procesados en él; que esas pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al presente legajo con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica; y que la valoración llevada a cabo para llegar al corolario fáctico que significa la base de los procesamiento dictados, habida cuenta del peso probatorio de los elementos cargos disponibles, no se aparta de las reglas de la lógica y del criterio humano y no es, por ende, manifiestamente errónea o arbitraria su valoración.

En este sentido, el intento de los impugnantes para que esta Alzada vuelva a valorar la prueba al margen del principio de inmediación está condenado al fracaso.

Es que en la decisión de la instancia quedó acreditado, con la provisoriedad que rige la etapa, el origen que tenían los fondos a los que Juan Ignacio Suris, en su carácter de jefe de la asociación o banda, procuró darles legitimidad mediante la adquisición de diversos vehículos –con la consiguiente utilización de terceras personas de su confianza que operaron como prestanombres– y las acreditaciones de fondos en las cuentas bancarias de las que era titular.

Téngase en cuenta, a título ilustrativo, el análisis de la PROCELAC, del cual surge que sólo teniendo en cuenta las operaciones consumadas por la asociación ilícita fiscal que fuera objeto de estudio del expediente referenciado, los réditos económicos alcanzados por Suris oscilarían entre \$2.219.181,82 y

USO OFICIAL



USO OFICIAL

\$4.438.363,83, valor este que surge de la multiplicación de los porcentajes por la emisión de las facturas apócrifas que él mismo declaró cobrar en forma de comisión (entre el 15, 20 o 30% del IVA) por los \$14.794.546,10 de IVA facturados en forma ficticia.

En este punto, analizadas las maniobras que han sido detalladas a lo largo del presente, se puede verificar que en todas ellas se han llevado adelante al menos alguno de los verbos típicos previstos en el art. 303 del CP.

En suma, la valoración conjunta e integral de los elementos de prueba colectados en el presente legajo, sumado a los indicadores referidos, provocan que el pronunciamiento atacado supere, con creces, los estándares de fundamentación de hecho y normativos exigidos por los arts. 123 y 404, inc. 2 del CPPN.

En ese orden, la existencia de las maniobras que, en términos de tipicidad y antijuridicidad, se verifican como probables, permite sostener el origen delictivo e ilícito de los fondos –en tanto provienen del rédito económico del comercio de estupefacientes y de la asociación ilícita fiscal– sin perjuicio de las críticas ensayadas por las defensas, las que, como dije, no podrán prosperar.

En conclusión, durante el transcurso de la pesquisa, y con los elementos de prueba directos e indiciarios que han logrado reunirse durante la instrucción del legajo, puede afirmarse, en consonancia con el resolutorio dictado por el *a quo* que, la hipótesis delictiva aquí investigada se acreditó, esto es determinar la existencia de hechos vinculados con el lavado de activos, provenientes de ilícitas actividades desarrolladas. Así Juan Ignacio Suris, se habría valido de personas de su círculo de confianza –en su carácter de jefe y organizador de las operaciones fraudulentas– que le sirvieron como un medio para darle apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de los injustos subyacentes.

10. De las medidas cautelares

A) Que, tal como fuera reseñado *ut supra*, la presente investigación se inicia a partir del expediente vinculado al delito de comercialización de estupefacientes agravado por la concurrencia organizada de tres o más personas (arts. 5, inc. “c” y 11, inc. “c” de la ley 23.737) en el marco de la causa FBB 12000124/2012/TO1, proceso penal con sentencia condenatoria dictada en la



instancia, encontrando responsables penalmente a los procesados, imponiendo a Juan Ignacio Suris la pena de seis años de prisión, multa, accesorias legales y costas.

A su turno, en el expediente FBB 12000018/2011, el requerimiento fiscal apuntó contra Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Flavio Rodrigo Carrano, Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga, como coautores penalmente responsables del delito de asociación ilícita fiscal, en ese entonces previsto y reprimido por el art. 15, inc. “c” de la ley 24.769. Tal como fuera señalado previamente, los mismos resultaron condenados recientemente, y el Tribunal Oral en lo Criminal resolvió unificar las penas dictadas, disponiendo en el caso de Juan Ignacio Suris la pena única de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, ordenando - y efectivizando- su detención.

A partir de dicha sentencia –de fecha posterior al dictado del procesamiento por el Juez *a quo*– la situación procesal de Juan Ignacio Suris amerita, una revisión y reevaluación, de conformidad con consolidada jurisprudencia de la Corte que sostiene que sus sentencias deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas aun cuando sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 343:1019 y 193; 342:1246; 342:278 y 580; 341:1356).

Cabe advertir que sin perjuicio de lo resuelto por el señor Juez *a quo*, las circunstancias actuales permiten inferir que, en el caso de mantener la libertad del causante, se encuentran configurados indicadores de riesgo procesal. El Sr. Fiscal Federal interviniente, a cuyo cargo se encuentra la dirección de la investigación, solicitó oportunamente que el dictado de su procesamiento fuera acompañado de la prisión preventiva por los motivos que expuso en su dictamen de fs. 1655/1671.

Lo cierto y concreto es que en la decisión de mérito se decretó el procesamiento de Juan Ignacio Suris por el delito lavado de activos en forma agravada por la habitualidad y por haber obrado en forma organizada (art. 303, inc. 2 del Cód. Penal), delito cuya gravedad determina –no sólo en razón de la naturaleza propia del hecho objeto de investigación, sino también en función del rol y de la participación penal atribuida al nombrado–, y así habré de señalar al señor Juez interviniente, la necesidad de reevaluar la procedencia del dictado de una medida cautelar personal, respecto del jefe de la organización, a los fines de asegurar su sujeción al proceso.

USO OFICIAL



USO OFICIAL

En ese orden, debe apreciarse que el Estado Argentino asumió la responsabilidad internacional de investigar y juzgar esta clase de delitos económicos, mediante la adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por Ley 24.759) y a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 26.097), razón por la cual se impone ser más rigurosos a la hora de analizar el dictado de una medida como la prevista en el artículo 312 del CPPN.

Así, no sólo cabe considerar entonces las características del hecho y la gravedad del delito atribuido, sino que también abona a la postura que se viene sosteniendo, la conducta adoptada por el encartado en la causa FBB 12000124/2012 –en la que resultó condenado por el delito de tráfico de estupefacientes– y en la que permaneció prófugo previo a su detención, proporcionando además información falsa sobre su identidad, elementos que resultan indicadores de un posible peligro de fuga (cfr. art. 221, incs. b y c del CPPF).

En tal sentido, y a la luz de tal antecedente, el quehacer ilícito enrostrado en el presente proceso, cuenta con severas penas conminadas en abstracto, cuya dosimetría sancionatoria, en principio, torna improcedente la aplicación de los supuestos previstos en los arts. 316 y 317 del código ritual, ya que de recaer condena en el presente proceso, la pena será ineludiblemente de cumplimiento efectivo.

B) Por otra parte, idénticas consideraciones caben formular respecto de aquellos consortes de causa cuyos procesamientos se propicia al acuerdo se confirmen.

En tal sentido, de las constancias acreditadas en las presentes actuaciones, verificadas en los Legajos de Identidad Personal de los procesados y de lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia, respecto de los antecedentes penales de los encartados, se advierten circunstancias que ameritan, la reevaluación de la procedencia de la medida cautelar personal analizada.

Tal es así que el Registro Nacional de Reincidencia informa en el marco del proceso FBB 12000124/2012 el procesamiento de Juan Ignacio Suris, dictado por el Juzgado Federal nro. 1, con prisión preventiva, por considerarlo *prima facie* autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes, figura agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas (conf. arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737).



En relación a Héctor Fabio Crucianelli, el citado organismo informa que, en el marco del proceso FSM 46308/2016, el 31/07/2017 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nro. 3 de Morón decretó su procesamiento y dispuso la prisión preventiva del nombrado, por considerarlo *prima facie* penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en carácter de organizador, en concurso real con los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, agravado por el ánimo de lucro, falsificación de documento destinado a acreditar la titularidad o habilitación para circular de vehículos automotores, falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado, desarme y comercialización de repuestos usados para automotores, sin poseer la correspondiente autorización o certificado de baja y desarme, en calidad de coautor (arts. 45, 55, 210 2do. párr., 277 inc. 1 ap. c), e inc. 3 ap. b), 292 2do. párr., 289, inc. 3 del CP, art. 13, ley 25.761). Asimismo, también informa que el 14/09/2022 el Juzgado Federal de Campana en el marco de la causa FSM 7617/2021/2/CA/17 decretó el procesamiento del nombrado por considerarlo *prima facie* coautor material y penalmente responsable del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, en su modalidad de almacenamiento y tenencia con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes (art. 5 inc. c, art. 11, inc. c, ley 23.737), y dispuso convertir en prisión preventiva la detención que Crucianelli venía sufriendo, de conformidad con el art. 312 del CPPN.

Por parte, con respecto a Domingo Tomás Goenaga se informa que el 26/05/2016 el Juzgado Federal nro. 1 de esta ciudad decretó su procesamiento, sin prisión preventiva por considerarlo autor *prima facie* penalmente responsable del delito de evasión fiscal agravada por el uso de facturas apócrifas, conforme art. 2 inc. d de la ley 26.735, (FBB 3727/2015).

En el caso de Rogelio Alberto Chanquía, se informa que resultó procesado por el mismo Juzgado Federal nro. 1 el 19/12/2019, sin prisión preventiva por ser considerado *prima facie*, coautor materialmente responsable del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, resolución confirmada por esta Alzada, recalificando los hechos como constitutivos de la figura de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c, ley 24.769).

Lo mencionado en los párrafos precedentes permite sostener además, la necesidad de ampliar y actualizar la certificación actuarial, respecto de la



USO OFICIAL

situación procesal de todos los procesados, por cuanto resulta necesario contar con la totalidad de los antecedentes penales, incluso con la información que surja de la reciente sentencia condenatoria dictada unificando las penas en el marco del proceso de asociación ilícita fiscal y al comercio de estupefacientes.

En definitiva, se impone –y así lo propongo, al solo efecto de no afectar la *reformatio in peius*–, la necesidad por parte del Juez de grado, de reevaluar la situación procesal de Juan Ignacio Suris, y de aquellos consortes de causa señalados en el presente acápite, en cuanto a la eventual procedencia de la medida prevista en el art. 312 del CPPN, que asegure no solo la comparecencia de los imputados a proceso, sino la efectiva realización del mismo conforme las normas procesales vigentes.

C) En otro orden, y respecto a los embargos y a la prohibición de salida del país dispuesta en la decisión de mérito cuestionados, se advierte la razonabilidad de los parámetros valorados, circunstancias que entiendo, y así propiciaré al acuerdo, corresponde confirmar respecto de los procesados.

11. Situación procesal de Paula Valeria Wagner

A continuación, corresponde analizar la situación procesal de Paula Valeria Wagner, adelantando que propondré al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto en su favor –aunque en razón de otros fundamentos– propiciando revocar el procesamiento dictado en relación a la nombrada, como partícipe necesaria del delito de lavado de activos.

Cabe recordar que el titular de Ministerio Público Fiscal, a cuyo cargo se encuentra la dirección de la investigación, solicitó se dicte la falta de mérito para procesar o sobreseer a Paula Valeria Wagner, en tanto no existían elementos probatorios suficientes para tal fin.

Ahora bien, corresponde efectuar, por imperio constitucional y convencional, un análisis de la situación procesal de la nombrada desde una perspectiva diversa a la realizada por el *a quo*, en tanto la valoración e interpretación de los elementos probatorios relacionados al objeto procesal, se traducen en la aplicación de normas objetivas que no contemplan el impacto diferenciado del cuadro fáctico y la construcción de responsabilidad penal, efectuada en relación a Paula Valeria Wagner.



Es que, las conductas estudiadas en las que se atribuya responsabilidad penal a alguna mujer, deben oficiosamente ser juzgadas con perspectiva de género, es decir, analizar la situación particular de esa mujer con un enfoque interseccional frente al caso concreto, lo que debe apreciarse y reflejarse en el resultado de la sentencia para cumplir con la obligación de impartir justicia, permitiendo alcanzar una resolución judicial más justa.

Los tipos penales que establecen conductas antijurídicas, relacionadas con los recursos procedentes de actividades ilícitas, no hacen distinción de la intervención de sujetos, por lo que no se contempla la desventaja estructural de las mujeres en las relaciones sociales, familiares y vinculares, colocándolas muchas veces, en una posición vulnerable frente a dichas normas.

En tal sentido, es el caso de la regulación del art. 303 y cc. del CP, el que para nada ha considerado la situación particular de las mujeres frente a la variedad de posibles conductas vinculadas a maniobras de lavado de dinero, y a su rol en la dinámica de comisión del mismo; se omite así toda consideración a la eventual relación o posición que pudiera tener una mujer procesada por tales hechos, cuyo esposo o pareja actuara en calidad de jefe u organizador de una banda o asociación dedicada a la comisión de operaciones de lavado de dinero.

Se ha sostenido jurisprudencialmente que, la adopción de normas rígidas sobre lo que se considera un comportamiento apropiado de la mujer, suele derivar en castigar a las que no se ajustan a esos estereotipos; y que el establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Todo ello lleva a que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa (cfr. CFCP, Sala 4 CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57, en causa “Baez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, registro nro. 125/23).

Así, los estereotipos de género en el proceso penal, operan distorsionando las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de circunstancias fácticas. En todos los ámbitos de aplicación de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la



USO OFICIAL

revictimización de las denunciantes” (Recomendación General N° 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, II. C. 26, P., 14).

Al respecto, la perspectiva de género debe ser particularmente tenida en cuenta a los efectos de valorar la prueba y analizar la imputación penal (cfr. CFCP, Sala IV, causa FSM 1128/2012/TO1/CFC1, caratulada: “Martínez, Ana María s/recurso de casación”, reg. nro. 300/20.4, 10/03/2020).

Sentado lo anterior, no se advierte que el auto recurrido haya merituado la situación procesal de Paula Valeria Wagner, a través de un contexto interseccional, habiéndose limitado a determinar los hechos y la aplicación de la norma penal desde una perspectiva rígida, sin atender al contexto global de operaciones de lavado de activos que llevó a cabo Suris, y sin ponderar, -bajo la perspectiva propuesta- las circunstancias que rodearon la intervención de Paula Valeria Wagner como esposa del jefe organizador de la operatoria.

En este contexto, la nombrada fue procesada bajo la estricta valoración de determinadas circunstancias, tales como: que resulta ser titular de 4 automóviles, a saber: Chery Sedan, dominio LBZ 778 desde 15/03/2012 a 28/08/2012; Peugeot Sedan 206, dominio FZN 038 desde 28/12/2007 a 23/08/2011; Mercedes Benz A160 Classic, dominio DJE 184 desde 13/01/2006 a 11/09/2008; Audi A3, dominio CMN 565, desde 29/11/2005 a 11/06/2007, y que era además la esposa de Juan Ignacio Suris. Se sostuvo también que la nombrada no poseía ingresos económicos producto del desarrollo de alguna actividad laboral en relación de dependencia, que hiciera posible realizar aportes para la compra de alguno de dichos vehículos.

Si bien tales circunstancias son datos objetivos que no se encuentran cuestionados, lo cierto y concreto es que, a entender del suscripto, no resultan suficientes para concluir en la participación dolosa de la nombrada en las maniobras de lavado, toda vez que tal como fuera señalado a lo largo del presente punto, su situación debe ser juzgada de manera conglobada con la perspectiva de género señalada, sin que se advierta un rol determinado dentro de la organización aludida, que exceda la mera condición de cónyuge de Juan Ignacio Suris.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe aclarar que el período temporal abarcado por el objeto procesal descripto por el titular del Ministerio Público



Fiscal –por el que resultó procesada Paula Valeria Wagner– comprende desde el 01/01/2008 al 25/06/2013, en consecuencia, el vehículo Audi A3 (dominio CMN 565) no se encontraría abarcado por el mismo, ya que fue adquirido con anterioridad al lapso temporal indicado, desde el 29/11/2005 a 11/06/2007.

En ocasión de ejercer su defensa material, la encartada afirmó que “las tenencias de los vehículos en cuestión se fueron comprando y vendiendo de forma sucesiva y no simultánea. Que no eran de alta gama y que además se habían ido pagando en cuotas. Al respecto, explicó que el de marca Chery lo habían comprado en una agencia cuando vendieron el Peugeot 206. Indicó que esos autos se los había comprado y puesto a nombre suyo su marido y que eran de la sociedad conyugal, para que lo manejaran junto con su hija. Tal extremo, explicaba por qué no se concedía la titularidad que registraba respecto de éstos con los aportes que ella realizaba, en tanto se dedicaba a tareas domésticas. Explicó que nunca sospechó que esos autos hubiesen sido adquiridos con dinero de origen ilícito porque su marido trabajaba con su padre en la sociedad, con las grúas, los sumping, para La Serenísima, para el Polo Petroquímico y que, además, los autos no eran caros.”

Lo declarado luce verosímil y razonable, en tanto, es práctica habitual de las relaciones conyugales, la registración de bienes con dicho carácter. Ello sumado a las conductas estereotipadas explicadas precedentemente, donde ante operatorias de dicha habitualidad, los cónyuges realizan verdaderamente actos jurídicos, sin conocer las eventuales consecuencias que pudieran tener relacionadas con la actividad desarrollada por alguno de ellos.

En efecto, el razonamiento que surge del decisorio recurrido si bien significó la reproducción del empleo del derecho penal basado en una mera igualdad formal, omitió ponderar el contexto en que se hallaba la imputada, lo que la coloca en una desigual situación frente al tramo fáctico atribuido.

En este sentido, habré de destacar que la nombrada no suscribió documentación para la constitución de persona jurídica alguna, no solicitó la apertura de cuentas bancarias, ni tampoco registró actividades financieras sospechosas, como así tampoco intervino en ningún movimiento de dinero. La nombrada no tuvo participación alguna en los ilícitos penales precedentes a la investigación actual –a diferencia de los restantes consortes de causa– ni mucho menos formó parte de

USO OFICIAL



USO OFICIAL

reuniones de directorio con otras personas o tomó decisiones vinculadas a las maniobras realizadas.

En tal sentido, la responsabilidad penal que se construye a su respecto, resulta basada en criterios de responsabilidad objetiva, tan sólo sustentada en su condición de esposa de Juan Ignacio Suris, sin ponderar que, desconocía los alcances de los actos realizados. Así, tampoco ha sido probado el conocimiento exigido para la configuración del ilícito penal en cuestión, ni siquiera a modo eventual.

A saber, su ámbito de actuación necesariamente estuvo condicionado a la decisión de quien era su esposo. La nombrada no tuvo jamás ninguna relación real de toma de decisiones respecto de las maniobras llevadas a cabo por Suris.

Además, la ponderación efectuada en la instancia en cuanto a la titularidad de los vehículos –que integraban la sociedad conyugal– no satisface las exigencias del GAFI para la definición de beneficiario, ni siquiera en el contexto de los acuerdos legales, es decir, allí donde la persona física, al final de la cadena, es quien en última instancia, posee o controla, incluyendo aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre el legal acuerdo, y/o las personas naturales en cuyo nombre se está llevando a cabo una transacción.

En conclusión, analizado el cuadro fáctico bajo la perspectiva propuesta, no existe nada que posibilite sostener fundadamente el aspecto tanto cognoscitivo cuanto volitivo y, por ende, doloso, de la participación de Paula Valeria Wagner en toda esta maniobra delictiva.

Por las consideraciones expuestas propongo al acuerdo se revoque el procesamiento dictado a Paula Valeria Wagner, adoptando en consecuencia la decisión intermedia establecida en el artículo 309 del CPPN, hasta tanto el avance de la instrucción permita resolver en forma definitiva su situación procesal.

12. Juan Pipkin

La decisión dictada en la instancia dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a Juan Pipkin en orden al delito que le fuera atribuido en autos, y ordenó la formación de causa por separado con las piezas procesales pertinentes a fin de investigar posibles conductas en infracción al art. 303 del CP por parte del nombrado y/u otros posibles intervinientes, dejando la dirección de la



investigación a cargo de la Fiscalía Federal n° 1 de esta ciudad en los términos previstos por el art. 196 del CPPN.

Contra dicha resolución, la defensa del encartado interpuso recurso de apelación (fs. 1722/1729) cuyos motivos de agravios fueron reseñados en el punto 1.

Las resoluciones que disponen, como en el caso, la falta de mérito, al no causar estado, no son impugnables por la defensa del imputado, de conformidad con lo previsto en el art. 311 del CPPN.

Así, doctrinariamente se sostiene que la limitación del art. 311 – en tanto restringe la impugnabilidad subjetiva– no afecta el art. 18, CN, pues su declaración no le causa gravamen irreparable al imputado y es estrictamente provisoria. Por el contrario, tanto al Ministerio Público como al querellante, les interesa que se convierta en procesamiento por la Alzada, pues así refuerzan la posibilidad de que el proceso se lleve a juicio (D’Albora Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación”, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 647).

En conclusión, el recurrente no cuenta con legitimación para impugnar la decisión que dispuso la falta de mérito de Juan Pipkin, por lo que propongo al acuerdo se declare mal concedido el recurso a su respecto.

Por lo expuesto, **propongo al acuerdo:** 1) Se rechacen los recursos de apelación interpuestos a fs. 1643/1644, 1645/1647, 1656/1681, 1682/1683 y 1692/1693, contra la resolución de fs. 1553/1639 y se confirme el procesamiento dictado y las medidas accesorias ordenadas en relación a Juan Ignacio Suris, Rogelio Alberto Chanquía, Domingo Tomás Goenaga, Nicolás Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli. 2) Se revoque el procesamiento dispuesto en relación a Paula Valeria Wagner, disponiendo en consecuencia la falta de mérito respecto de la nombrada de conformidad con lo normado por el art. 309 del CPP, revocándose el embargo y la prohibición de salida del país ordenada a su respecto. 3) Se declare mal concedido el recurso de apelación de fs. 1651/1655. 4) Se disponga que la instancia de grado, reevalúe, de conformidad con lo expuesto en el apartado 10) la situación procesal de Juan Ignacio Suris, y de aquellos consortes de causa señalados en el acápite, en cuanto a la eventual procedencia de la medida

USO OFICIAL



USO OFICIAL

prevista en el art. 312 del CPP, con el fin de asegurar, tanto la comparecencia de los imputados a proceso, como la efectiva realización del mismo, conforme las normas procesales vigentes.

ES MI VOTO.

El señor Juez de Cámara, Leandro Sergio Picado, dijo:

1ro.) En las particulares circunstancias de la causa, me adhiero, en lo sustancial, al voto de mi colega preopinante, salvo en lo dispuesto en el considerando 10, respecto de la necesidad de que el Juez de grado reevalúe la situación procesal de Juan Ignacio Suris, y de aquellos consortes de causa señalados en dicho apartado, en cuanto a la eventual procedencia de la medida prevista en el art. 312 del CPPN.

Ello por cuanto debe tenerse presente, no sólo que el Juez de grado, en oportunidad de dictar el auto de mérito hizo una evaluación de los riesgos procesales respecto de los imputados en esta causa, sino que en la instancia de grado, rechazó el nuevo pedido de prisión preventiva de Juan Ignacio Suris, efectuado por el fiscal a cargo de la investigación; rechazo que tuvo lugar luego de dictada la sentencia de condena en la causa FBB 12000018/2011/TO1, por el delito de asociación ilícita tributaria, y en la que se unificó la condena y la pena junto a la correspondiente a la causa FBB 12000124/2012/TO1, por tráfico de estupefacientes, lo que motivó la detención de Juan Ignacio Suris.

Así, el Juez *a quo* sostuvo que no habían variado los extremos oportunamente valorados al concederle la exención de prisión (en el incidente nro. 6) así como al dictar su procesamiento sin prisión preventiva, oportunidades en las que concluyó que no se encontraban presentes indicios que permitieran avizorar que Juan Ignacio Suris obstaculizaría el avance de la investigación o eludiría la acción de la justicia, y que –consideró– que continuaban vigentes.

A lo que cabe agregar que en el presente no hubo recurso del Ministerio Público Fiscal, ni tampoco fue apelado el rechazo del último pedido.

2do.) Por último, respecto de Paula Valeria Wagner comparto la falta de mérito propuesta en el voto que antecede, esto en virtud de la valoración de las pruebas obrantes en autos.



En efecto, la nombrada no suscribió documentación para la constitución de persona jurídica alguna, no solicitó la apertura de cuentas bancarias, ni tampoco registró actividades financieras sospechosas, como así tampoco intervino en ningún movimiento de dinero.

Tampoco se advierte que haya tenido participación en los ilícitos penales precedentes a la investigación actual –a diferencia de los restantes consortes de causa– ni mucho menos formó parte de reuniones de directorio con otras personas o tomó decisiones vinculadas a las maniobras realizadas.

Asimismo, como sostuvo mi colega preopinante, la responsabilidad penal se construyó en base a criterios de responsabilidad objetiva, por el solo hecho de haber sido esposa de Juan Ignacio Suris, sin ponderar que, no ha sido probado el conocimiento exigido para la configuración del ilícito penal en cuestión, ni siquiera a modo eventual; sin haber tenido ninguna relación real de toma de decisiones respecto de las maniobras llevadas a cabo por Suris.

Además, la ponderación efectuada en la instancia en cuanto a la titularidad de los vehículos –que integraban la sociedad conyugal– no satisface las exigencias del GAFI para la definición de beneficiario, ni siquiera en el contexto de los acuerdos legales, es decir, allí donde la persona física, al final de la cadena, es quien en última instancia, posee o controla, incluyendo aquellas personas que ejercen el control efectivo final sobre el legal acuerdo, y/o las personas naturales en cuyo nombre se está llevando a cabo una transacción.

ASÍ VOTO.

El señor Juez de Cámara, Pablo Esteban Larriera, dijo:

En lo que es materia de disidencia entre mis colegas preopinantes, dadas las especiales circunstancias de la causa, adhiero al voto del señor Juez de Cámara Roberto Daniel Amabile, por compartir en lo sustancial sus fundamentos.

Por ello, y por mayoría de los votos que instruyen el presente,
SE RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 1643/1644, 1645/1647, 1656/1681, 1682/1683 y 1692/1693, contra la resolución de fs. 1553/1639 y confirmar el procesamiento dictado y las medidas accesorias ordenadas en relación a Juan Ignacio Suris, Rogelio Alberto Chanquía, Domingo Tomás Goenaga, Nicolás



USO OFICIAL

Ibarra Gutiérrez, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Fabio Héctor Crucianelli. **2)** Revocar el procesamiento dispuesto en relación a Paula Valeria Wagner, disponiendo en consecuencia la falta de mérito respecto de la nombrada de conformidad con lo normado por el art. 309 del CPP, revocándose el embargo y la prohibición de salida del país ordenada a su respecto. **3)** Declarar mal concedido el recurso de apelación de fs. 1651/1655. **4)** Disponer que la instancia de grado, reevalúe, de conformidad con lo expuesto en el apartado **10)** la situación procesal de Juan Ignacio Suris, y de aquellos consortes de causa señalados en el acápite, en cuanto a la eventual procedencia de la medida prevista en el art. 312 del CPP, con el fin de asegurar, tanto la comparecencia de los imputados a proceso, como la efectiva realización del mismo, conforme las normas procesales vigentes.

Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN N^{ros.} 15/13 y 24/13) y devuélvase.

Roberto Daniel Amabile

Leandro Sergio Picado

Pablo Esteban Larriera

Ante mí:

Nicolás Alfredo Yulita
Secretario de Cámara

cl

